



Asamblea General

Sexagésimo primer período de sesiones

68^a sesión plenaria

Jueves 7 de diciembre de 2006, a las 10.00 horas
Nueva York

Documentos Oficiales

Presidente: Sra. Al-Khalifa (Bahrein)

En ausencia del Presidente, el Sr. Wenaweser (Liechtenstein), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

Se abre la sesión a las 10.05 horas.

Tema 71 del programa

Los océanos y el derecho del mar

a) Los océanos y el derecho del mar

Informe del Secretario General (A/61/63 y A/61/63/Add.1)

Informe del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional (A/61/65)

Informe sobre la séptima reunión del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar (A/61/156)

Proyecto de resolución (A/61/L.30)

b) La pesca sostenible, incluso mediante el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación

y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, e instrumentos conexos

Informe del Secretario General (A/61/154)

Proyecto de resolución (A/61/L.38)

El Presidente interino (habla en inglés): Tiene la palabra el representante del Brasil para presentar el proyecto de resolución A/61/L.30.

Sr. Duarte (Brasil) (habla en inglés): En el período de sesiones de la Asamblea General que nos ocupa el Brasil ha tenido, una vez más, el honor de coordinar consultas oficiosas sobre los océanos y el derecho del mar, en virtud del subtema a) del tema 71 del programa. Por lo tanto tengo el placer de presentar el proyecto de resolución A/61/L.30, titulado “Los océanos y el derecho del mar”, en nombre de sus patrocinadores, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Cabo Verde, Croacia, Chipre, Finlandia, Grecia, Estados Federados de Micronesia, Islandia, Italia, Jamaica, Malta, México, Mónaco, Namibia, Nueva Zelandia, Noruega, Portugal, Federación de Rusia, Santa Lucía, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, Tonga, Trinidad y Tabago, Estados Unidos de América y mi propio país, Brasil.

El proyecto de resolución es el resultado de la labor dedicada y las valiosas contribuciones de muchas delegaciones. Quiero expresar mi agradecimiento por su participación constructiva y creativa en las

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-154A. Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento separado.



consultas. Asimismo quiero dar las gracias al Sr. Vladimir Golitsyn, Director de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, y a su personal por la competente asistencia profesional que nos han proporcionado.

El debate que iniciamos hoy y el proyecto de resolución que nos ocupa reflejan el compromiso de la comunidad internacional con la colaboración, y la integración de actividades y medidas normativas en los asuntos oceánicos, según lo prescrito en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Como se destaca en el proyecto, esa Convención histórica establece el marco jurídico dentro del cual deben llevarse a cabo todas las actividades relativas a los océanos y los mares.

En el proyecto se aborda una amplia gama de cuestiones relacionadas con los océanos, tales como el desarrollo sostenible de los océanos y los mares; la creación de capacidad y la transferencia de tecnología marina a los países en desarrollo; el funcionamiento efectivo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar; las labores de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental; la investigación científica marina y la protección del medio marino, entre otras.

Quisiera subrayar las siguientes decisiones, reflejadas en el proyecto del año en curso: la definición de los temas para las reuniones de 2007 y 2008 del proceso abierto de consultas oficiosas, "Los recursos genéticos marinos" y "La seguridad marítima", respectivamente; la convocatoria, en 2008, del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, que considerará cuestiones concretas; la finalización, en un plazo de dos años, de una "evaluación de evaluaciones", como fase preparatoria de cara a la creación de un proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos; y la petición dirigida al Secretario General de preparar un estudio sobre la asistencia disponible y sobre las medidas que pueden adoptar los Estados en desarrollo para beneficiarse del aprovechamiento sostenible y efectivo de los recursos marinos y los usos de los océanos dentro de los límites de su jurisdicción nacional.

Lamentablemente, no se llegó a una redacción generalmente aceptable en todos los párrafos propuestos dentro del plazo adjudicado a las consultas. Sin lugar a dudas, las cuestiones en las que un acuerdo ha sido difícil de alcanzar seguirán siendo de interés para las delegaciones. Espero que, en el futuro, se encuentre una solución aceptable para todos.

Asimismo, espero que, en el futuro, las delegaciones consideren seriamente un aspecto particular del proyecto de resolución que, en mi opinión, nos afecta a todos: su creciente ampliación. A pesar de los esfuerzos realizados, el proyecto del año en curso cuenta con 20 párrafos adicionales con respecto a la resolución 60/30, del pasado año, que, a su vez, incluía 11 párrafos más que la anterior, la resolución 59/24. Si bien, por un lado, esa tendencia refleja el carácter general de la resolución y la variedad y complejidad de las cuestiones que se tratan, por otro, puede que consuma un valioso tiempo de debate y que sobrecargue el texto con cuestiones que no son esenciales para la función central de la resolución, la formulación de políticas.

Hechas las observaciones finales con respecto a las consultas oficiosas sobre el proyecto, reitero mi más profundo agradecimiento a aquellos que participaron en esas consultas y que han contribuido al éxito del resultado.

A continuación formularé algunas observaciones a título nacional.

El Brasil ha mostrado siempre su firme compromiso con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como con la plena aplicación de sus disposiciones. Con más de 7.500 kilómetros de costa y una plataforma continental que supera las 200 millas marinas y que cubre una amplia zona, el Brasil estuvo entre los primeros países en presentar información en virtud del artículo 76 sobre el establecimiento de los límites exteriores de su plataforma continental más allá de 200 millas marinas. Ese proceso acaba de entrar en su fase final y pronto se formularán recomendaciones sobre la información aportada por el Brasil, que serán señaladas a la atención de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Al respecto, el Brasil subraya la necesidad de que se logre una interacción dinámica entre los Estados que presentan información y la Comisión, según el

párrafo 47 del proyecto de resolución, y acoge con beneplácito las enmiendas del artículo 52 y del anexo III del reglamento de la Comisión. Al dar la oportunidad a los Estados ribereños de compartir sus opiniones directamente con otros miembros de la Comisión, esas medidas permitirán que haya más transparencia y fortalecerán el proceso de examen de las presentaciones.

En lo relativo al creciente volumen de trabajo previsto para la Comisión en los próximos años, debido al número actual y proyectado de nuevas presentaciones, el Brasil está convencido de la necesidad de asegurar que la Comisión pueda desempeñar sus funciones con eficacia y mantener su alto nivel de calidad y experiencia. Al respecto, indicamos que, en el transcurso de la próxima reunión de los Estados partes en la Convención en 2007, se celebrarán elecciones en la Comisión el 14 de junio y se dedicarán cinco días laborables al debate de las cuestiones sustantivas.

El proceso abierto de consultas officiosas sobre los océanos y el derecho del mar está orientado a facilitar la celebración de debates en la Asamblea General. Permite que haya una mejor comprensión de las cuestiones amplias, complejas y polifacéticas, y ayuda a identificar áreas en las que se debe fomentar la coordinación y la cooperación a escala intergubernamental e interinstitucional.

En lo relativo al tema del Proceso para 2007, “Los recursos genéticos marinos”, la falta de conocimientos científicos sobre esa compleja cuestión es bien sabida. Por lo tanto, los debates que se celebrarán durante el próximo proceso abierto de consultas officiosas ayudarán a comprender mejor cuestiones tales como las opciones para crear mecanismos legales de acceso y para compartir los beneficios; las posibilidades para aumentar la cooperación internacional en el fomento de la capacidad en los países en desarrollo, incluida la transferencia de tecnología; los posibles sistemas de derechos de propiedad intelectual; y las consecuencias socioeconómicas del uso de los recursos genéticos marinos, los productos y derivados, y su impacto en el desarrollo socioeconómico global.

La cuestión de los recursos genéticos fuera de las zonas de jurisdicción nacional es otro de los puntos concretos identificados en el párrafo 91 del proyecto de resolución que se debatirán en el próximo período de

sesiones del Grupo de Trabajo especial officioso de composición abierta para tratar cuestiones en relación con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional.

La decisión de celebrar la próxima reunión del Grupo de Trabajo especial en 2008, con servicios completos de conferencias, unida al hecho de que el tema del proceso abierto de consultas officiosas del año anterior sea “Recursos genéticos marinos”, permitirá una mejor preparación y, esperamos, debates más exhaustivos. Esa será la segunda reunión del Grupo de Trabajo y, sin duda, presentará otra oportunidad valiosa para que todos los países se comprometan plenamente en los debates centrados en la biodiversidad marina, sobre la base de los puntos identificados en el párrafo 91.

Existe una necesidad evidente de comprender mejor y de aumentar la protección y la preservación de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción nacional. A ese respecto, según la Convención, las actividades en la Zona han de realizarse para beneficio de la humanidad en su conjunto, teniendo en cuenta de manera particular los intereses y las necesidades de los países en desarrollo. Los recursos biológicos de la Zona, incluidos los recursos genéticos, no pueden ser agotados o explotados en forma inapropiada y deben ser utilizados en favor de las generaciones presentes, así como también preservados para las generaciones futuras.

Con respecto al estado de los océanos y a la manera en que se pueden abordar cuestiones tales como la degradación del medio marino y la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad marina, se necesita llevar a cabo una evaluación científica que sirva de base para la adopción de decisiones racionales y la gestión de los océanos. Por lo tanto, es importante completar la “evaluación de evaluaciones” en un período de dos años, como se pide en el párrafo 115 del proyecto de resolución, con miras a establecer el proceso ordinario.

Pasando ahora a la pesca sostenible, reconocemos los esfuerzos que se han realizado para llegar a un texto de consenso para el proyecto de resolución de este año. A ese respecto, deseo expresar el reconocimiento del Brasil a la Sra. Holly Koehler de los Estados Unidos de América por su papel de coordinadora y por sus intentos para ajustar tantas

opiniones distintas con respecto a las medidas que se deben adoptar contra las prácticas pesqueras destructivas en los ecosistemas marinos vulnerables.

Se lograron muchas mejoras y muchos adelantos en la conservación y gestión de los recursos marinos vivos, pero aún queda mucho por hacer. Para alcanzar el objetivo de tener pesca sostenible hay que apoyarse en la formulación de medidas apropiadas de conservación y gestión. El problema reside en la manera de aplicar esas medidas y alentar a los Estados a que las cumplan a fin de detener el agotamiento de las poblaciones de peces y la destrucción de la biodiversidad marina.

Hay varios obstáculos que socavan ese objetivo. Uno de ellos es, ciertamente, la cuestión del exceso de capacidad de pesca. Ello no se debe solamente a las actividades pesqueras ilegales, no reglamentadas y no declaradas, sino también a la existencia de algunas flotas pesqueras sobredimensionadas. La situación actual de las cuotas pesqueras no debería poner en peligro los esfuerzos que realizan los Estados en desarrollo por participar en actividades pesqueras sostenibles, incluso por renovar sus flotas pesqueras. En nuestra opinión, los Estados deben luchar contra las actividades pesqueras ilegales, no reglamentadas y no declaradas y cumplir con las medidas adoptadas por las organizaciones regionales de ordenación pesquera para la regulación de la pesca en los fondos marinos, así como prohibir definitivamente las prácticas pesqueras destructivas.

El proyecto de resolución de este año sobre cuestiones relativas a la pesca no contempla la prohibición provisional de la pesca con redes de arrastre de fondo. Ha asignado a los Estados y a las organizaciones regionales de ordenación pesquera toda la responsabilidad de reglamentar tales actividades, así como de adoptar y aplicar medidas para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, de conformidad con el criterio de precaución y los enfoques basados en los ecosistemas. Tenemos la esperanza de que tales medidas puedan ser adoptadas a tiempo. Se están destruyendo los ecosistemas marinos y algunas especies ya han sido explotadas en exceso o agotadas.

Si se ha de lograr la pesca sostenible, se necesitan varias medidas, entre las cuales se encuentran el aumento del número de signatarios y de ratificaciones del Acuerdo de 1995; el combate enérgico contra las actividades pesqueras ilegales, no reguladas y no

declaradas; la aplicación de medidas más eficaces para localizar los peces y los productos pesqueros; la participación en la actual Red Internacional de seguimiento, control y vigilancia de las actividades relacionadas con la pesca, que tiene carácter voluntario; la disminución, con carácter de urgencia, de la capacidad de las flotas pesqueras del mundo; la eliminación de las prácticas pesqueras destructivas; el aumento de la cooperación en los planos subregional, regional y mundial; el aumento de la formación de capacidades en los países en desarrollo, y la transferencia eficaz de las tecnologías pesqueras. En este sentido, la cooperación es una palabra clave. Se menciona muchas veces en el proyecto de este año, así como en resoluciones previas sobre la pesca. Hoy más que nunca es el momento de ponerla en práctica.

Han transcurrido 24 años desde la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y 12 años desde su entrada en vigor, y ya el desarrollo del derecho del mar contribuye y seguirá contribuyendo a fortalecer la paz, la seguridad, la cooperación y las relaciones amistosas entre todas las naciones. No obstante, subsisten problemas importantes que se deben afrontar para que la Convención logre plenamente su objetivo, igualmente importante, de fomentar los avances económicos y sociales de todos los pueblos del mundo.

El Presidente interino (*habla en inglés*): Tiene la palabra el representante de los Estados Unidos de América para presentar el proyecto de resolución A/61/L.38.

Sr. Floyd (Estados Unidos de América) (*habla en inglés*): Mi delegación tiene el honor de patrocinar el proyecto de resolución A/61/L.30, titulado "Los océanos y el derecho del mar". También tenemos el honor de presentar, en nombre de los patrocinadores, el proyecto de resolución A/61/L.38 sobre la pesca sostenible.

Este año, el proyecto de resolución sobre la pesca sostenible aparece en un momento de gran preocupación con respecto al estado de poblaciones de peces esenciales en los océanos mundiales y los efectos de ciertas prácticas pesqueras en el ecosistema marino. Nos complace que el proyecto de resolución pida, entre otras cosas, medidas concretas para restringir las prácticas pesqueras destructivas, para controlar las actividades pesqueras ilegales, no reguladas y no declaradas, para reducir la capacidad de pesca y para aplicar el Acuerdo sobre las Poblaciones de Peces.

Este año, se ha centrado mucha atención en la necesidad de regular de manera más estricta la pesca con redes de arrastre de fondo en zonas no incluidas en las jurisdicciones nacionales. Los Estados Unidos, junto con muchos otros países, han procurado lograr resultados más positivos para abordar los daños que la pesca con redes de arrastre puede causar en las zonas vulnerables. No obstante, consideramos que las disposiciones contenidas en el proyecto de resolución constituyen un avance bienvenido y positivo. Continuaremos nuestros esfuerzos por lograr avances en esta esfera a través de las organizaciones y los arreglos regionales de ordenación pesquera que sean pertinentes y mediante negociaciones destinadas a establecer nuevas organizaciones de ese tipo en donde no existan actualmente. El proyecto de resolución también hace suyos los trabajos de la Conferencia de revisión del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces, que se celebró en mayo de 2006. Los Estados Unidos reafirman su opinión con respecto a la importancia del Acuerdo y de las innovadoras recomendaciones de la Conferencia de revisión. Exhortamos a todos los Estados que aun no se han hecho partes en el Acuerdo a que así lo hagan. También creemos que el Acuerdo debe seguir siendo la base para realizar negociaciones sobre nuevos acuerdos regionales, como el que actualmente está en marcha en el Pacífico meridional, y que todos los Estados del pabellón también deben aplicar sus principios básicos a ciertas poblaciones de peces diferenciadas de alta mar.

Para los Estados Unidos sigue siendo una alta prioridad la reducción de la capacidad de las flotas pesqueras del mundo. Insistiremos en la plena aplicación del texto del proyecto de resolución de este año que exhorta a los Estados a que se comprometan “con carácter de urgencia a reducir la capacidad de las flotas pesqueras del mundo a niveles acordes con la sostenibilidad de las poblaciones de peces” (A/61/L.38, párr. 57). Con relación a las actividades pesqueras ilegales, no reguladas y no declaradas, el proyecto de resolución reconoce los esfuerzos por abordar ese problema a lo largo del último año, pero indica que son necesarios más avances en ese ámbito. La próxima reunión que se celebrará en Kobe, Japón, representa una oportunidad para reforzar la manera en que las cinco organizaciones regionales de ordenación de la pesca que controlan las poblaciones de peces altamente migratorios aborden las actividades pesqueras ilegales, no reguladas y no declaradas, la ordenación de la capacidad de pesca y otros asuntos. También queremos

ver que los Estados del puerto adopten medidas más enérgicas para impedir desembarcos y transbordos en sus puertos de los peces capturados en contravención de los regímenes normativos existentes.

Queda mucho trabajo por hacer si hemos de garantizar la sostenibilidad de las poblaciones mundiales de peces. Las organizaciones regionales de ordenación de la pesca siguen siendo el mejor mecanismo disponible para reglamentar las actividades internacionales de pesca. De todas maneras, aún hay mucho que se puede mejorar en la manera en que nos esforzamos por lograr nuestros objetivos comunes. Con ese propósito, debemos emprender un examen sistemático del funcionamiento de las organizaciones regionales de ordenación de la pesca. Una modalidad sería que en la reunión de Kobe se conviniera en examinar el funcionamiento de las cinco organizaciones regionales de ordenación del atún, sobre la base de criterios comunes y a través de un método común.

Quiero dar las gracias a todas las delegaciones por su intenso trabajo en la elaboración del proyecto de resolución. Los Estados Unidos se sintieron muy orgullosos de proporcionar de una vez más al coordinador de las consultas oficiosas. Queremos felicitar a la Sra. Holly Koehler, quien condujo las negociaciones hasta su feliz final, por sus extraordinarios esfuerzos.

Pasando al tema de los océanos y el derecho del mar, creemos que las decisiones y las declaraciones contenidas en el proyecto de resolución de este año (A/61/L.30) brindan un marco constructivo para lograr avances en los años venideros sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con temas marinos. Adoptando la decisión positiva de dejar de lado la tradición, este año los negociadores se pusieron de acuerdo sobre los temas centrales para las dos reuniones siguientes del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar. En junio próximo nos centraremos en los recursos genéticos marinos en las zonas tanto al interior como fuera de las jurisdicciones nacionales. Damos las gracias a nuestros colegas del Brasil por proponer el tema y por su flexibilidad para ampliarlo de manera que incluya recursos en la jurisdicción de los Estados ribereños.

También damos las gracias a nuestros colegas de Australia por proponer el tema que fue seleccionado

para la reunión del Proceso de consultas para 2008: la seguridad marítima. Este tema tan importante y oportuno recordará a la comunidad internacional que el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones de la Convención del derecho del mar son esenciales para la seguridad de todas las naciones y la seguridad y eficiencia del comercio internacional.

Debido a que consideramos que las reuniones del Proceso de consultas amplían el conocimiento y la conciencia de la comunidad internacional con respecto a nuevas cuestiones, nos preocupamos particularmente acerca de la manera en que los elementos de la última reunión, sobre los enfoques de los ecosistemas y los océanos, que mucho tardaron en convenirse, serían incorporados en el proyecto de resolución. Damos las gracias a nuestros colegas del Canadá por formular el compromiso intermedio entre incorporar todo el texto o sólo referirse al mismo de manera breve. Necesitaremos tener presente este dilema en la próxima reunión del Proceso de consultas y quizás recortar los elementos convenidos a un tamaño más manejable.

Aguardamos con interés la nueva reunión del Grupo de trabajo sobre la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional en 2008. Volver a convocar la reunión con servicios de conferencia completos permitirá a los expertos de todas las naciones participar en los debates sobre la mejor manera de conservar y utilizar en forma sostenible esos recursos.

También celebramos el liderazgo de la delegación de China con respecto a elaborar la sección del proyecto de resolución sobre la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Todos reconocemos la importancia de las labores de la Comisión y de la necesidad que tiene de recibir apoyo adicional.

Los Estados Unidos conceden gran importancia al cumplimiento del párrafo 65 de la parte dispositiva del proyecto de resolución A/61/L.30, que exhorta a los Estados “a que garanticen la seguridad de la navegación y los derechos de paso en tránsito y de paso inocente de conformidad con el derecho internacional, en particular la Convención [sobre el Derecho del Mar]”.

Destacamos que la Organización Marítima Internacional no ha autorizado el pilotaje obligatorio ni la aplicación de medidas coercitivas en el caso de no utilizar un piloto a través de cualquier estrecho utilizado para la navegación internacional. Dicho esto,

los Estados Unidos alientan firmemente a todos los barcos a que utilicen un piloto cuando los estrechos de tránsito utilizados por la navegación internacional sean especialmente difíciles de navegar, en circunstancias que no conlleven la negación del derecho al paso de tránsito en la forma especificada por la Convención o le que generen dificultades o le perjudiquen. La aceptación de un piloto en estas circunstancias también ayudará a proteger los ecosistemas sensibles, un objetivo que todos los países comparten con los Estados que lindan con los estrechos que son utilizados para la navegación.

También damos las gracias al Ministro Plenipotenciario Carlos Duarte del Brasil por su paciente y hábil coordinación del proyecto de resolución sobre los océanos. Como siempre, reconocemos la especialización y el apoyo que brindan a ambos proyectos de resolución Vladimir Golitsyn y el personal de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar.

Sr. Wolfe (Jamaica) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre de los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Sumo mi voz a la de los oradores que han acogido con beneplácito el amplio informe del Secretario General (A/61/63 y Add.1), que pone en perspectiva los acontecimientos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y las labores de las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones que se relacionan con asuntos oceánicos y el derecho del mar.

La CARICOM destaca con satisfacción el aumento constante a lo largo de los años del número de partes en la Convención y sus acuerdos de aplicación, a medida que la Convención avanza hacia su aceptación universal.

Junto con este aumento en el número de miembros, observamos acontecimientos positivos relacionados con la práctica de los Estados de establecer líneas de base, delimitar fronteras marítimas, así como también realizar presentaciones de informes sobre el trazado de los límites exteriores de la plataforma continental, actividad que ha adquirido ímpetu en los últimos meses. Ello demuestra que la Convención constituye un marco jurídico apropiado y un instrumento eficaz mediante el cual los Estados partes pueden abordar sus diferencias y preocupaciones relacionadas con cuestiones marítimas. La Convención

también fomenta una cooperación y un entendimiento mayores entre los Estados al promover sus intereses marítimos, y al respecto el Secretario General, en su informe, recuerda a los Estados la obligación que les incumbe de informar a la Secretaría sobre la evolución de los acontecimientos y los acuerdos concertados.

Los Estados miembros de la CARICOM continúan prestando apoyo a la evolución y a la aplicación progresivas de la Convención y de las instituciones creadas por ella.

Durante el período que se examina, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos celebró su 11º período de sesiones en Kingston (Jamaica). Encomiamos la labor de la Autoridad y su función en lo que respecta a la elaboración de reglamentaciones sobre prospección y exploración de sulfuros polimetálicos y cortezas de ferromanganeso ricas en cobalto en la Zona, y aunque aún queda camino por recorrer antes de que pueda llevarse a cabo una explotación minera comercial, el enfoque y las actividades de los Estados y de la Autoridad respecto de la elaboración de esas reglamentaciones son ciertamente alentadores.

Reconocemos que la Autoridad es la única institución legítima a la que se le ha encomendado, en nombre de toda la humanidad, la responsabilidad de reglamentar las actividades en la Zona, de conformidad con lo estipulado por la Convención. En ese sentido, la labor de la Autoridad reviste una importancia especial para la CARICOM, no sólo porque en la región se localiza su sede, sino también debido a la importancia que las actividades marítimas tienen para nuestros países y porque creemos con firmeza en el principio fundamental de acceso a los recursos y a la distribución de los beneficios provenientes de los recursos de la Zona dentro del marco jurídico establecido por la Convención, el que ahora, como podría afirmarse, forma parte del derecho internacional consuetudinario.

La importancia y, de hecho, parte del éxito que la Autoridad ha tenido hasta la fecha se debe al hecho de que la Autoridad recibió una solicitud de aprobación de un programa de trabajo para la exploración de nódulos polimetálicos en la Zona presentada por el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania. Esa es la primera solicitud presentada desde que se estableció la Autoridad y ciertamente desde que se concertó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar hace casi un cuarto de siglo.

Por consiguiente, la CARICOM espera con interés seguir trabajando con la comunidad internacional para consolidar esos logros.

Como la Autoridad sigue ampliando el alcance de su labor, la CARICOM apoya los esfuerzos destinados a promover la colaboración internacional en materia de investigación científica marina, especialmente en lo relativo a la participación de científicos de países en desarrollo. Los seminarios celebrados en ese sentido permitirán que los científicos de países en desarrollo tengan acceso a un cuerpo de conocimientos, cuyos beneficios tendrían un efecto multiplicador en términos de cooperación regional e interregional.

Como representante del país anfitrión, no podría finalizar esta parte de mi declaración relativa a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sin promover la asistencia a las reuniones anuales de los Estados partes, que se celebrarán en Jamaica, y la participación plena en sus deliberaciones.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una de las instituciones creadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para solucionar de manera pacífica los litigios, conmemora su décimo aniversario este año. Reiteramos la importancia vital que reviste la labor que realiza el Tribunal y sus logros a lo largo de los años en la prestación eficaz de la justicia en las causas que le han sido sometidas. Alentamos a los Estados partes a que sigan recurriendo al Tribunal con respecto a toda controversia relacionada con la interpretación o la aplicación de las disposiciones de la Convención.

Tomamos nota de la labor de los Comités del Tribunal, que llevan a cabo una revisión continua de las novedades, manteniendo así al corriente al Tribunal. La creación de un comité de relaciones públicas destinado a facilitar la labor del Tribunal de difundir información y mantener relaciones con otras entidades y procesos internacionales es una iniciativa progresista, y, por consiguiente, instamos a los Estados Miembros a respaldar ese esfuerzo del Tribunal a medida que continúa promoviendo su labor.

La CARICOM quisiera referirse concretamente a otra iniciativa del Tribunal, a saber, su programa de capacitación y divulgación mediante la realización de seminarios regionales. La CARICOM espera recibir beneficios de esa iniciativa y prevé celebrar el próximo seminario en Jamaica en abril de 2007. Al observar hoy la presencia del Presidente del Tribunal en el Salón,

quisiera felicitarlo por su iniciativa en ese sentido y también por la cordial invitación que me ha extendido, en mi calidad de Presidente del 16° período de sesiones de los Estados partes, para participar en las celebraciones del décimo aniversario del Tribunal que tendrán lugar en Hamburgo.

También expresamos un especial agradecimiento al Organismo de Cooperación Internacional de Corea, que, hasta fines de 2005, ayudó a 32 pasantes procedentes de países en desarrollo al solventar los costos de su participación en el programa de pasantías del Tribunal.

La otra institución creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, realiza una labor muy importante relacionada con las presentaciones de informes de los Estados partes sobre la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas marítimas, de conformidad con las disposiciones de la Convención.

En ese sentido, la CARICOM desea aprovechar la oportunidad para instar a los Estados y a otras entidades que puedan hacerlo a que proporcionen asistencia científica y técnica a los países en desarrollo a medida que éstos preparan sus presentaciones de informes a la Comisión a fin de cumplir con el plazo, en 2009, de recepción de esas presentaciones.

A la CARICOM le complace el ímpetu que ha generado el número cada vez mayor de presentaciones, pero al mismo tiempo observamos con preocupación las dificultades que encara la Comisión en lo que respecta a la carga de trabajo que soportan sus miembros y a la financiación para solventar la asistencia a las reuniones de las subcomisiones.

El Presidente de la Comisión ha informado a los Estados partes de que, de conformidad con los arreglos vigentes, la Comisión quizá no esté en condiciones de desempeñar sus funciones en forma eficiente y oportuna, e instamos a los Estados partes a que celebren consultas constructivas a fin de resolver los problemas.

Asimismo, reconocemos la importante contribución aportada por el programa de becas de la Fundación Nippon al impartir cursos de capacitación para el personal técnico y administrativo de los Estados ribereños en desarrollo sobre el trazado de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las

200 millas marítimas y la preparación de presentaciones de informes a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Los Estados miembros de la CARICOM, como Estados partes en la Convención, siguen participando activamente en las reuniones de los Estados partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Consideramos que las deliberaciones sobre cuestiones relativas al derecho del mar que se celebran en ese foro son de fundamental importancia para promover la colaboración y el fortalecimiento del cumplimiento de todos los aspectos de la Convención.

En su informe, el Secretario General nos recordó las repercusiones mundiales que tiene el comercio marítimo en la economía mundial y su contribución como fuente de ingresos, en particular para las economías de los países en desarrollo. El transporte marítimo cumple una función esencial en las economías de los Estados de la CARICOM ya que hasta el 80% del comercio exterior de la región es transportado por vía marítima. La llegada de cruceros y otras actividades de turismo marítimo siguen siendo unas de las principales fuentes de divisas para la región.

Reconociendo la importancia crucial que tiene el entorno marino y ribereño para la región y la necesidad de proteger y conservar de manera adecuada los recursos de nuestros océanos y mares y utilizarlos en forma sostenible, los Estados de la CARICOM han procurado obtener la cooperación de la comunidad internacional a fin de que se reconozca al Mar Caribe como zona especial dentro del contexto del desarrollo sostenible. Instamos a todas las delegaciones a prestar apoyo a esa iniciativa, que se incluye en el marco jurídico de la Convención sobre el Derecho del Mar.

Algunos países de la región también han emprendido programas nacionales de acción para proteger el entorno marino de las fuentes terrestres de contaminación y de las actividades. Esas políticas tienen por objeto concentrarse fundamentalmente en las tres fuentes principales de contaminación terrestre del entorno marino de la región: el tratamiento y la disposición de aguas residuales, las prácticas agrícolas y la recolección y disposición de desechos sólidos. Además, el sector privado y la sociedad civil se asociarán con los Gobiernos para realizar una serie de actividades con arreglo a diversos programas nacionales. La región cuenta con financiación de

diversas entidades, incluso con subvenciones, préstamos y subsidios gubernamentales de asociados externos, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La región debería beneficiarse también del propuesto establecimiento de un fondo rotatorio del Caribe para la ordenación de aguas residuales que ofrecería oportunidades adicionales a los Estados de la región de tener acceso a financiación para abordar la cuestión de la ordenación de las aguas residuales. De conformidad con la segunda reunión intergubernamental de examen del Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, que se celebró recientemente en Beijing, en el mes de octubre, tenemos la intención de aplicar vigorosamente las recomendaciones y el plan de acción que emanaron de esa reunión. Estas actividades corresponden a las posibilidades cada vez mayores de la región de transformarse en un centro importante de transporte marítimo.

Algunos de los países de la región de la CARICOM siguen ofreciendo matrícula internacional de buques, y nuestro objetivo es siempre garantizar la aplicación de las normas más elevadas de seguridad y prevención en materia de contaminación de conformidad con las disposiciones de la Organización Marítima Internacional (OMI). En ese sentido, la CARICOM acoge con beneplácito el Código de aplicación de los instrumentos de la OMI de cumplimiento obligatorio, que establece las normas para el cumplimiento voluntario de los Estados Miembros.

El transporte de materiales radiactivos a través del Mar Caribe sigue preocupando profundamente a la región ya que en ella se trata de evitar la posibilidad cada vez mayor de daño o contaminación del entorno marino, su ecosistema y la pérdida subsiguiente de medios de subsistencia de las aguas circundantes de las cuales dependen muchos de nuestros ciudadanos. Seguimos instando a los Estados interesados a que examinen medios alternativos de disponer de los materiales radiactivos y otros desechos tóxicos. Si bien acatamos el derecho internacional en lo referente a la libertad de circulación, es imprescindible que se ponga fin al transporte de materiales radiactivos a través de nuestra región.

Por esa razón, la CARICOM agradece mucho que en el proyecto de resolución de la Asamblea General sobre los océanos y derecho del mar (A/61/L.30), que

tenemos hoy ante nosotros, se recalque esa particular preocupación. Nuestras inquietudes relacionadas con las posibilidades de daño en el caso de que ocurra un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales radiactivos se plantean debido a los diversos esfuerzos que se realizan en la región por salvaguardar el entorno marino.

Destacamos uno de esos esfuerzos relacionados con la labor del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe, entre cuyos objetivos se incluye la ordenación eficiente y el desarrollo sostenible de los recursos marinos y de otros recursos acuáticos y la promoción y el establecimiento de acuerdos cooperativos entre los Estados interesados a fin de lograr la ordenación eficiente de poblaciones de peces transzonales o altamente migratorios y de otros recursos acuáticos compartidos.

La secretaría del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe, que está comprometida con la sostenibilidad de los recursos como medio de aumentar las oportunidades de empleo y la seguridad alimentaria tanto en el plano nacional como en el regional, actualmente celebra seminarios cuyos objetivos consisten en concertar un acuerdo regional sobre las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas, sobre la supervisión, el control y la vigilancia de los Estados Miembros, así como sobre la realización de un seminario de capacitación para formadores de funcionarios de extensión piscícola a fin de mejorar su capacidad de brindar una información, un asesoramiento y servicios de capacitación mejores a organizaciones nacionales de pescadores.

La CARICOM ha logrado adelantos considerables en el acatamiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo relativas a las condiciones laborales de los marinos. El Memorando de Entendimiento de la CARICOM sobre control por el Estado del puerto otorga a los Estados de la CARICOM el derecho a realizar inspecciones en buques extranjeros en los puertos de la región a fin de garantizar que los buques extranjeros cumplan las normas aceptadas internacionalmente en lo que respecta a las condiciones de vida de los marinos a bordo, y garanticen en forma adecuada su bienestar, su salud y su seguridad de conformidad con las normas internacionales vigentes.

Observamos las actividades que realizan los Estados que lindan con estrechos internacionales, los

Estados usuarios y los principales interesados de la industria del transporte marítimo relacionadas con la seguridad de la navegación y la prevención, la reducción y el control de la contaminación proveniente de buques, incluida la protección ambiental, y con el empeño por abordar la seguridad marítima. La CARICOM insta a que todos los interesados a que redoblen sus esfuerzos por encontrar soluciones de avenencia viables a través de los instrumentos internacionales y legales en vigor.

Los Estados de la CARICOM siguen expresando preocupación por los niveles cada vez mayores de violencia que se registran en relación con el contrabando, el tráfico de seres humanos, la piratería y los actos contra el transporte marítimo y su vinculación con la delincuencia transnacional organizada. Por consiguiente, alentamos a que se desarrollen y fortalezcan los instrumentos internacionales pertinentes para poner coto a esa tendencia deplorable.

La CARICOM respalda el enfoque por ecosistemas que está basado en el concepto de ordenación integrada, creando una base más amplia para el desarrollo sostenible. Continuamos adoptando medidas destinadas a proteger de manera integral el medio ambiente al poner un énfasis especial en la interconexión existente entre los recursos marinos vivos, medidas especiales para proteger ecosistemas frágiles o excepcionales y hábitats de especies diezmadadas, amenazadas o en peligro y otras formas de vida marina. Por consiguiente, la CARICOM acoge con agrado el establecimiento del Grupo Directivo Especial y del grupo de expertos a fin de que presenten informes y evalúen el estado del medio marino, incluidos los aspectos socioeconómicos.

Varios Estados de la región han adoptado políticas relativas a los océanos mientras otros están creando un marco legislativo destinado a lograr un sistema integrado de ordenación de océanos y zonas ribereñas. La armonización y la coordinación de la labor de diversos organismos que poseen mandatos distintos han resultado difíciles pero no insuperables.

La aplicación del enfoque por ecosistemas requerirá el apoyo financiero y la asistencia técnica constantes de nuestros vecinos y de otros asociados si se desea lograr los beneficios mencionados. En el informe del Secretario General se reconoce con razón la necesidad de cooperación y respaldo internacionales

para contribuir en todos los aspectos del fomento de la capacidad, incluso mejorando la concienciación nacional en lo que respecta a las posibilidades que, en general, brindan los recursos marinos y capacitando a científicos, al personal que se ocupa de la ordenación de recursos y a otro personal que tiene a su cargo los recursos humanos en el ámbito local.

La CARICOM insta a todos los Estados que estén en condiciones de hacerlo a que contribuyan a los respectivos fondos fiduciarios establecidos por el Tribunal a fin de ayudar a los Estados a solucionar sus controversias, así como a consolidar la capacidad de países en desarrollo mediante la más amplia participación posible de expertos y funcionarios de esos países en las esferas multidimensionales del derecho del mar. Agradecemos las contribuciones que han aportado varios países a los fondos fiduciarios.

La Sra. Mladineo (Croacia), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.

La CARICOM se adhiere al principio de que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituye el marco jurídico primordial para reglamentar y controlar todas las actividades que se realizan en los océanos y mares. Consideramos que el proceso abierto de consultas oficiosas es un entorno propicio para examinar temas que benefician a toda la humanidad. Las cuestiones de la diversidad biológica marina y los recursos genéticos revisten una gran importancia para nuestra región. Esos son los recursos del futuro que podrían tener efectos muy positivos en nuestra evolución a largo plazo como pequeños Estados insulares.

Por último, la CARICOM está comprometida a trabajar con otros miembros de la comunidad internacional para lograr la plena aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Sr. Hakapää (Finlandia) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre de la Unión Europea y de la Comunidad Europea, como partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Hacen suya esta declaración Bulgaria y Rumania, países adherentes; Croacia y la ex República Yugoslava de Macedonia, países candidatos; y Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Moldova y Serbia, países del Proceso de Estabilización y Asociación y candidatos potenciales.

La grave situación de los océanos es conocida e irrefutable. La destrucción de los ecosistemas, las amenazas a los peces y la pérdida de biodiversidad marina son hechos y datos científicos ampliamente contrastados. La preocupación por el futuro de los océanos fue común en todos los participantes en las consultas que desembocaron en el proyecto de resolución general de este año sobre los océanos y el derecho del mar, coordinadas con gran aptitud por el Sr. Carlos Duarte del Brasil, a quien estamos agradecidos por sus constantes esfuerzos por alcanzar un consenso.

La comunidad internacional no se ha quedado indiferente ante las amenazas que sufre el medio oceánico. En los últimos decenios se han adoptado numerosas medidas —nacionales, regionales y mundiales— para hacer frente a esos retos. Desde su aprobación, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ha proporcionado el marco jurídico básico para esos esfuerzos, así como para toda actividad que se lleve a cabo en los océanos.

No obstante, dentro de ese marco hacen falta más acciones concertadas a fin de preservar los océanos para las generaciones venideras. Al asumir esa misión, hay que dejar de ver los océanos y los mares desde un punto de vista puramente sectorial, y hay que verlos en su conjunto, adoptando un enfoque integrado con respecto a las múltiples amenazas a las que está expuesto el medio marino. Como se señala en el preámbulo del proyecto de resolución general, debemos reconocer que “los problemas del espacio oceánico están estrechamente relacionados entre sí y han de examinarse en conjunto aplicando un enfoque integrado, interdisciplinario e intersectorial” (A/61/L.30, *séxtimo párrafo del preámbulo*).

En junio se recalcó la necesidad de adoptar ese enfoque integrado en la séptima reunión del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar, que se centró en los enfoques basados en los ecosistemas y los océanos. En la reunión se destacaron los esfuerzos realizados en pro de una ordenación integrada de las actividades humanas basada en los mejores conocimientos científicos disponibles y en el criterio de precaución para lograr un uso sostenible de los bienes y servicios y mantener la integridad del ecosistema. La Unión Europea suscribe la invitación que se hace en el proyecto de resolución general para que los Estados examinen los elementos relacionados

con los enfoques basados en los ecosistemas y los océanos acordados por consenso por el proceso de consultas y expuestos en el informe de su reunión.

Hacen falta medidas concretas, amplias y oportunas para lograr los resultados previstos. En el ámbito de la Unión Europea, en el tercer trimestre del año la Comisión Europea publicó una comunicación sobre una posible política marítima de la Unión Europea. En la comunicación se presentaban ideas para abordar las cuestiones marítimas de una manera amplia y global. Además, se ha puesto en marcha un proceso de consultas que está abierto a todos los interesados.

La Unión Europea ha expresado en distintos foros su gran preocupación por la protección y preservación de la biodiversidad marina, en particular en zonas que están fuera de su jurisdicción nacional. Ante la alarmante pérdida de biodiversidad marina, hay que adoptar medidas efectivas sin más demora. La Unión ha presentado una propuesta para la elaboración de un acuerdo de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar con respecto a la protección y preservación de la biodiversidad marina. En la reunión del proceso de consultas oficiosas celebrada en junio, la Unión Europea también presentó elementos que podrían incluirse en dicho acuerdo.

Desde nuestro punto de vista, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar ofrece el marco en el que abordar las ventajas de un enfoque integrado multisectorial en materia de protección de la biodiversidad marina. Es algo especialmente importante en vista de la situación en la que nos encontramos, en la que no hay una base jurídica internacional acordada para adoptar ese tipo de medidas internacionales fundamentales para proteger la biodiversidad marina como el establecimiento de zonas marinas protegidas fuera de la jurisdicción nacional. En opinión de la Unión Europea, un acuerdo de aplicación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sería una contribución importante para lograr el compromiso adquirido en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible para contar con una red representativa de zonas marinas protegidas para el año 2012.

Habida cuenta de que la conservación y la ordenación de la biodiversidad revisten carácter de urgencia, la Unión Europea propone que se adopten medidas rápidas para convocar una conferencia

destinada a concertar ese acuerdo de aplicación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Unión Europea respalda la decisión que figura en el proyecto de resolución general de pedir al Secretario General que vuelva a convocar una reunión del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta creado con arreglo a la resolución 59/24 de la Asamblea General para estudiar las cuestiones relacionadas con la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. En la primera reunión del Grupo de Trabajo, celebrada en febrero, se abordaron numerosas cuestiones importantes, que forman una buena base para futuros debates. No obstante, a la Unión Europea le preocupa que se esté agotando el tiempo de que dispone la comunidad internacional para actuar.

La Unión Europea también valora el hecho de que el proyecto de resolución facilite las deliberaciones del Grupo de Trabajo especificando los temas en los que el Grupo de Trabajo debería centrarse en su próxima reunión, todos ellos de importancia obvia para una mejor protección y preservación de la biodiversidad marina.

La Unión Europea confiere particular importancia al apartado e) del párrafo 91 del proyecto de resolución. El Grupo de Trabajo examinará si hay alguna laguna en la ordenación o regulación relativa a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional y, si es así, la manera de abordarla. La Unión Europea ha venido estudiando esa cuestión en los últimos años y ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de abordar las actuales lagunas en materia de gestión es un acuerdo de aplicación en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Unión Europea espera compartir sus ideas y entablar un diálogo constructivo para encontrar soluciones efectivas y duraderas a las amenazas que afronta la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional.

Este año es decisivo en nuestros esfuerzos conjuntos para promover una mayor adhesión al Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces de 1995 y para mejorar su aplicación. De la Conferencia de Revisión que se celebró en mayo con arreglo al artículo 36 del Acuerdo salieron firmes recomendaciones conformes a su mandato, que todos

los participantes acordaron, tanto las partes signatarias como las no signatarias. El eje de esas recomendaciones consiste en la función central que las organizaciones regionales de ordenación pesquera deben desempeñar para ordenar la pesca en alta mar. La Unión Europea hace hincapié en la necesidad de seguir reforzando esas organizaciones y de velar por que estén establecidas en todas las zonas de los océanos del mundo con carácter de urgencia.

La eliminación de las prácticas de pesca destructivas es un objetivo que compartimos todos. Adquirimos un compromiso claro y explícito en ese sentido en virtud del Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo. El debate internacional sobre esta cuestión crucial, incluido el reciente examen de los progresos alcanzados en respuesta al llamamiento a favor de medidas urgentes, hecho por esta Asamblea General en 2004, ha sido entusiasta y sumamente esclarecedor.

El acuerdo al que hemos llegado en el marco del proyecto de resolución de este año es importante, aunque la Unión Europea hubiera preferido un resultado más ambicioso. Ahora depende de las organizaciones regionales de ordenación pesquera y de los Estados cuyos buques enarbolan su pabellón aceptar que la pesca que tenga consecuencias perjudiciales para los ecosistemas marinos vulnerables debe estar estrictamente regulada para evitar esos efectos o prohibida cuando no sea posible evitarlos.

Debe haber plena transparencia y un escrutinio mutuo respecto de las medidas que se adopten para lograr ese objetivo. Además, se deben asignar más recursos a mejorar la investigación científica en el medio marino. Los Estados y las organizaciones regionales de ordenación pesquera deben cumplir de manera responsable con las obligaciones que hayan contraído en virtud del derecho del mar y deben estar dispuestos a rendir cuentas ante la comunidad internacional. La protección del medio marino y, en particular, de los ecosistemas marinos vulnerables es una responsabilidad común. La Unión Europea se compromete a adoptar medidas rápidas, junto con sus asociados, para dar seguimiento a lo que se acuerde en la Asamblea General.

Por lo tanto, la Unión Europea vuelve a insistir en la necesidad imperiosa de adoptar medidas cualitativas en materia de cumplimiento e imposición y en la lucha contra la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada.

Esta lacra sigue siendo el principal obstáculo para una pesca sostenible y para la conservación del medio marino. La Unión Europea celebra las recomendaciones formuladas por la Conferencia de examen del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces en ese sentido y el hecho de que la Asamblea General las haya hecho suyas, y espera que allanen el camino que conduce hacia la adopción de medidas decisivas en los próximos meses.

Hablando de pesca, también nos gustaría aprovechar esta ocasión para transmitir nuestro cálido agradecimiento a la Sra. Holly Koehler, de los Estados Unidos de América, por haber coordinado una vez más, con gran aptitud y paciencia, las consultas sobre el proyecto de resolución sobre pesca sostenible.

La Unión Europea toma nota con reconocimiento de varios hechos positivos relativos al derecho del mar ocurridos en el último año. En el proyecto de resolución general se expresa la debida satisfacción por el progreso de la labor de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. A medida que aumenta el volumen de trabajo de la Comisión, es indispensable velar por que la Comisión pueda seguir desempeñando sus funciones efectivamente, así como mantener su gran nivel de pericia.

El contrato firmado en julio de 2006 entre Alemania y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre la exploración de nódulos polimetálicos en una zona del Océano Pacífico representa un hito en las actividades de la Autoridad puesto que se refiere a la primera solicitud de un plan de trabajo desde la entrada en vigor de la Convención y desde las anteriores solicitudes de los primeros inversionistas.

En el proyecto de resolución también se toma nota de la primera reunión del Grupo Directivo Especial para la "evaluación de evaluaciones" iniciada como etapa preparatoria para el establecimiento del proceso ordinario de presentación de informes y evaluación del estado del medio marino a escala mundial, incluidos los aspectos socioeconómicos. Como hemos señalado, la Unión Europea considera que la evaluación es un vehículo importante para mejorar la cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas y otros órganos. También esperamos que suponga una firme base para mejorar la adopción de políticas relacionadas con los océanos.

La Unión Europea reconoce la importante labor realizada en varios foros, como la Organización

Marítima Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, tal como se menciona en la sección VIII del proyecto de resolución general, sobre seguridad de la navegación y ejecución por el Estado del pabellón.

En ese contexto, la Unión Europea también quisiera recalcar la importancia del principio de libertad de navegación y los derechos de paso inocente y de paso en tránsito de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En ese sentido, la Unión Europea reafirma su opinión de que las leyes y regulaciones adoptadas por los Estados ribereños de los estrechos utilizados para la navegación internacional relativos al paso en tránsito por estrechos, de conformidad con la Convención, no deben discriminar de forma ni de hecho entre los buques extranjeros o en su aplicación tener el efecto práctico de denegar, obstaculizar o impedir el derecho al paso en tránsito. Además, la Unión Europea quisiera recalcar que los Estados portuarios deben ejercer su soberanía en relación con la ordenación de sus puertos de una manera que no sea discriminatoria y que sea congruente con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otros instrumentos pertinentes del derecho internacional.

Todos los miembros de la comunidad internacional deben tener plenas oportunidades de beneficiarse de los regímenes jurídicos aplicables a los usos oceánicos. No obstante, en la práctica, no siempre hay ese tipo de oportunidades debido a la falta de recursos disponibles para el disfrute efectivo de esos regímenes. En el proyecto de resolución general se destacan debidamente la asistencia y el apoyo a los Estados en desarrollo con miras a, entre otras cosas, integrar mejor un desarrollo marino sostenible y efectivo en las políticas y programas nacionales. La Unión Europea confiere gran importancia a la plena posibilidad de que todos los Estados participen en la aplicación de las reglas y principios del derecho del mar.

También nos gustaría recalcar que sigue siendo necesario que haya más información y más comprensión del medio marino y de sus ecosistemas vulnerables. En ese contexto, el proceso de consultas oficiosas tiene una importante función que desempeñar. Reconocemos la avenencia a la que se llegó sobre cuestiones que habrán de abordarse en los próximos años, relativas a dos grupos de cuestiones importantes: los recursos genéticos marinos para 2007 y la seguridad marítima para 2008. Por otro lado,

reconocemos que todavía hay que lograr ciertas mejoras en el funcionamiento del proceso de consultas. Un programa con un número excesivo de grupos de trabajo y consultas tal vez no contribuya de la mejor manera posible a lograr sus nobles objetivos.

Para concluir, quisiéramos transmitir nuestro reconocimiento a la Secretaría y a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar por la labor profesional que han realizado el último año. En especial, nos referimos a la preparación del informe anual sobre los océanos y el derecho del mar, que ha resultado ser una herramienta valiosísima para los debates sobre el derecho del mar. Deseamos todo lo mejor a los colegas de la División que están a punto de jubilarse, en particular a su Director, el Sr. Vladimir Golitsyn.

Sr. Beck (Palau) (*habla en inglés*): Tengo el honor de hablar en nombre de los miembros del Foro de las Islas del Pacífico que están representados en las Naciones Unidas, a saber, Australia, Fiji, Kiribati, la República de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelanda, Papua Nueva Guinea, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, así como mi propio país, Palau.

El Foro de las Islas del Pacífico comprende una región con Estados diversos. Como grupo, disfrutamos colectivamente de una vasta extensión de espacios oceánicos conectados entre sí y de recursos marinos. El océano y sus recursos son fundamentales para la propia existencia de nuestra región, por lo cual, como custodios mancomunados, compartimos el objetivo común de garantizar su conservación y ordenación sostenibles.

Los dirigentes de las naciones del Foro de las Islas del Pacífico se reunieron en Nadi (Fiji) en octubre pasado y estuvieron de acuerdo en asumir el compromiso histórico de proteger nuestro océano y sus recursos. Algunos miembros de la Asamblea recordarán que nuestros dirigentes sostuvieron una reunión similar en Tarawa (Kiribati) en 1989, en la que instaron al mundo a prohibir la pesca de altura en gran escala con redes de enmalle en el Pacífico meridional. En la Declaración de Nadi los dirigentes instan a las naciones del Foro de las Islas del Pacífico a que “impulsen los esfuerzos internacionales por imponer una prohibición provisional inmediata de las prácticas pesqueras destructivas, incluida la pesca con redes de arrastre de fondo” (A/61/558, pág. 12) en zonas no

sometidas a ordenación que estén fuera de la jurisdicción nacional, así como a trabajar en la aplicación de medidas de conservación y gestión que sean adecuadas para prevenir las prácticas pesqueras destructivas en otras zonas de alta mar.

Nuestros dirigentes consideraron que era necesario adoptar medidas urgentes contra las prácticas pesqueras destructivas porque esas prácticas socavan la conservación y utilización sostenibles de la diversidad biológica marina, que es crucial para nuestro propio modo de vida.

Las consultas de este año sobre el proyecto de resolución relativo a la pesca sostenible (A/61/L.38) se centraron particularmente en el tema de las prácticas pesqueras, incluida la pesca en los fondos marinos, que tienen repercusiones negativas para los ecosistemas marinos vulnerables. Las naciones pesqueras responsables entienden la necesidad de poner fin a las prácticas pesqueras destructivas, incluida la pesca con redes de arrastre de fondo en los ecosistemas marinos vulnerables y muchas han adoptado medidas para restringir esas prácticas en sus aguas jurisdiccionales. En este sentido, tomamos nota de la observación formulada por el Secretario General en su excelente informe de este año de que se considera que el 95% de los daños a los ecosistemas de los montes marinos son causados por la pesca con redes de arrastre de fondo —que habitualmente es más intensa en las zonas en que los peces se concentran para alimentarse y desovar— y que, al menos en las aguas internacionales, esa práctica, en el mejor de los casos, sigue estando poco reglamentada.

Repito, el 95% de los daños a los ecosistemas de los montes marinos son causados por la pesca con redes de arrastre de fondo. Por consiguiente, acogemos con beneplácito el proyecto de resolución final sobre la pesca sostenible como un importante avance en los esfuerzos internacionales para reglamentar la pesca en los fondos marinos en aguas internacionales. Habida cuenta de los escasos progresos alcanzados en la adopción de las medidas urgentes que se solicitaron hace dos años en la resolución sobre pesca con respecto a las aguas internacionales, fue importante que la Asamblea General intensificara considerablemente sus llamamientos para que se tomaran medidas en ese sentido.

Nos satisface que las organizaciones regionales de ordenación pesquera establecidas y en proceso de

formación cuenten en estos momentos con una serie de medidas claras que pueden aplicar a fin de reglamentar la pesca en los fondos marinos, pesca que tiene repercusiones destructivas sobre los ecosistemas marinos vulnerables. El proyecto de resolución de este año llega mucho más lejos que el de 2004, pues establece las normas para la ordenación de las actividades de pesca en los fondos marinos y sus repercusiones sobre los ecosistemas vulnerables. Este proyecto de resolución apunta directamente a prevenir grandes efectos negativos, protegiendo, en efecto, los ecosistemas marinos vulnerables de la pesca destructiva. La adopción por las organizaciones regionales de ordenación pesquera del sólido conjunto de medidas que se solicita en el párrafo 83 debería traer consigo una reducción muy sustancial de las actividades de pesca destructiva en alta mar.

Asimismo, acogemos con beneplácito el llamamiento formulado en el párrafo 85 a favor de que los Estados que participan en las negociaciones establezcan una organización regional de ordenación pesquera para garantizar la adopción y aplicación de medidas provisionales coherentes con el párrafo 83 a más tardar en diciembre de 2007. La tarea será asumida por los países del Pacífico y otros países que participan en las negociaciones para establecer un acuerdo de ordenación pesquera para el Pacífico meridional. Resulta lamentable que durante la celebración de nuestra reunión de la organización regional de ordenación pesquera en el Pacífico meridional, en Hobart (Australia) algunos países aún no estuvieran preparados para adoptar medidas provisionales. Abrigamos la esperanza de que, con el impulso dado por el proyecto de resolución, esas medidas se adopten en la próxima reunión que se celebrará en Chile, en abril de 2007.

Para los países del Pacífico, el aspecto más desalentador del proyecto de resolución sobre la pesca sostenible, a la luz de los compromisos asumidos en la Declaración de Nadi, fueron las medidas dirigidas a abordar la pesca en los fondos marinos en zonas no reglamentadas de alta mar. De conformidad con el mandato de la Declaración de Nadi, los países del Foro pidieron enérgicamente una prohibición provisional inmediata de la pesca con redes de arrastre de fondo en zonas no reglamentadas.

Lamentamos sobremanera que algunos Estados no estuvieran de acuerdo en apoyar ese enfoque. Consideramos que una prohibición provisional habría

sido la forma más clara y eficaz de enfrentar los efectos de la pesca en los fondos marinos en las zonas en las que no hay medidas multilaterales vigentes ni en perspectiva. Una prohibición provisional habría estimulado aún más la creación de nuevas organizaciones regionales de ordenación pesquera en zonas no reglamentadas. Nos desalentó también que un pequeño grupo de Estados no estuviera dispuesto a considerar la posibilidad de congelar la ampliación de la pesca en los fondos marinos en aguas no reglamentadas más allá de los niveles existentes. Creemos que ello es contrario a la intención y al espíritu de muchas de las medidas que figuran en el proyecto de resolución de este año.

Sin embargo, reconocemos la gran importancia del párrafo 86 del proyecto de resolución de este año, en el que se aclara que se precisan medidas para controlar la pesca en los fondos marinos en todas las zonas de las aguas internacionales, incluidas las zonas no reglamentadas, y que la no adopción de medidas sencillamente no es una opción. En virtud del proyecto de resolución, la pesca en los fondos marinos en zonas no reglamentadas de alta mar debe ser objeto de medidas de los Estados del pabellón como las que se detallan en el párrafo 83, a fin de prevenir daños a los ecosistemas marinos vulnerables, o no debe autorizarse en absoluto.

También es muy importante reconocer que se insta a los Estados, cuyas embarcaciones realizan actividades de pesca en los fondos marinos de alta mar, incluso en zonas no reglamentadas, a publicar, por conducto de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, una lista de las embarcaciones autorizadas a realizar actividades de pesca en fondos marinos en esas zonas y las medidas adoptadas de conformidad con el párrafo 86. Lógicamente, la idoneidad de esas medidas y su cumplimiento por los Estados serán temas fundamentales en nuestro debate actual y seguirán siendo objeto de nuestra más cuidadosa atención.

Si bien habríamos preferido medidas multilaterales mucho más enérgicas en relación con las zonas no reglamentadas, como la prohibición provisional inmediata que propiciamos, los países del Foro reconocen que este conjunto de medidas representa un avance considerable en relación con el statu quo. También reconocemos que los Estados, bajo el excelente liderazgo de los coordinadores, trabajaron de forma denodada para llegar al consenso y que el

proyecto de resolución de este año refleja el compromiso colectivo de la comunidad internacional, que abarca a los Estados pesqueros y no pesqueros.

No obstante, todos sabemos que los Estados aún pueden hacer más. Instamos a los Estados del pabellón en particular a garantizar que sus embarcaciones y sus nacionales pesquen de forma responsable y de conformidad con las medidas de conservación y ordenación, incluidas las que se establecen en el párrafo 86 del proyecto de resolución de este año.

La comunidad internacional deberá actuar de manera centrada y disciplinada, tanto a nivel individual como colectivo, para aplicar las medidas que acordamos hoy. Los países del Foro irán a la vanguardia de esta acción, y esperamos que otros tengan el mismo nivel de compromiso para asumir este reto y cumplir con sus responsabilidades.

Por esas razones, los miembros del Foro están dispuestos a apoyar la aprobación de este proyecto de resolución que, en nuestra opinión, es una medida positiva de la comunidad internacional encaminada a apoyar la pesca responsable y a proteger la biodiversidad marina en zonas fuera de la jurisdicción nacional.

Sra. Negm (Egipto) (*habla en árabe*): Ante todo quisiera expresar el agradecimiento de la delegación de Egipto al Secretario General y a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar por los valiosos informes que han presentado en virtud de este tema relativos a los océanos y el derecho del mar (A/61/63) y sobre la pesca sostenible y los ecosistemas marinos vulnerables.

La delegación de Egipto considera muy importante la aplicación del derecho del mar, sobre todo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que se considera la piedra angular de un sistema internacional integrado que rige las cuestiones marinas. Este sistema no sólo incluye la delimitación de las zonas marítimas y la definición de los límites de la jurisdicción nacional de los Estados ribereños sino que también ofrece una base para el concepto de ordenación integrada de los océanos que permite velar por los intereses de todos los Estados, sin excepción.

En este sentido, la delegación de Egipto quisiera decir que no deja de inquietarle el hecho de que hayan sido insuficientes las medidas que ha adoptado hasta

ahora la comunidad internacional para proteger los ecosistemas marinos y para garantizar su desarrollo sostenible.

En cuanto a las prácticas pesqueras, la delegación de Egipto reitera que es peligroso permitir que los grandes espacios marítimos y oceánicos estén abiertos a todo tipo de prácticas pesqueras ilegales, como la pesca excesiva y la pesca no declarada y no reglamentada, y en especial a la pesca con redes de arrastre de fondo y con palangre y redes de enmalle fijas de fondo. Todas esas prácticas son perjudiciales para el hábitat de los corales. Consideramos que este problema debe abordarse en un futuro próximo.

En este sentido, las condiciones de los ecosistemas marinos podrían mejorarse mediante la utilización de tecnologías modernas para la pesca y para la cartografía de las aguas profundas, en lugar de utilizarlas para la pesca excesiva, que dificulta la sostenibilidad de las poblaciones de peces y puede diezmar las poblaciones para las que se utiliza y las especies conexas, sobre todo en las aguas profundas o sus alrededores, como los montes submarinos, los arrecifes de aguas frías y las fosas. Las prácticas pesqueras ilegales no sólo alteran el funcionamiento de los ecosistemas sino que también pueden provocar la extinción de los peces en menos de 40 años.

Por lo tanto, la delegación de Egipto tenía la esperanza de que en el nuevo proyecto de resolución se incluyera una prohibición provisional que se aplicaría directamente en las zonas de pesca no reglamentada de alta mar, que quedan fuera de los límites de la jurisdicción nacional sobre las zonas costeras.

La degradación constante de los ecosistemas marinos es un problema fundamental al que deberíamos otorgar gran importancia, sobre todo en relación con la contaminación causada por los vertimientos de petróleo, el vertimiento de desechos, la radiación causada por el vertimiento de desechos radiactivos y la presencia de sustancias nocivas y peligrosas en los mares y los océanos.

En este caso, observamos que el actual régimen jurídico y las medidas que han adoptado los Estados hasta la fecha son insuficientes para proteger a las poblaciones de peces de la eventualidad de que la explotación exceda su capacidad natural de reproducirse para mantener su número. Además, las iniciativas internacionales para aplicar las recomendaciones de varios estudios orientadas a impedir que sigan

degradándose los ecosistemas marinos, principalmente los encaminados a aumentar las poblaciones de peces existentes, siguen siendo insuficientes.

La delegación de Egipto sigue teniendo serias reservas sobre varias disposiciones del Acuerdo sobre las poblaciones de peces, principalmente sobre sus artículos 21 y 22 relativos al registro y la inspección de los buques pesqueros con pabellón de un Estado que no es el mismo del buque que efectúa el abordaje. También nos inquietan las consecuencias negativas de la aplicación de las disposiciones del Acuerdo y la posibilidad de que dichas disposiciones puedan incidir en los derechos, las obligaciones y los intereses de los Estados ribereños en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, especialmente del artículo 7 del Acuerdo sobre las poblaciones de peces de 1995, que podría conducir a la imposición de medidas que talvez tendrían consecuencias para los derechos soberanos de los Estado ribereños.

Por último, mi delegación acoge con agrado la decisión de centrar las deliberaciones de 2007 del Proceso de consultas sobre la cuestión de los recursos genéticos marinos en las zonas que quedan fuera de la jurisdicción nacional. Egipto también considera importantísima la seguridad marina. No obstante, reiteramos que debería evitarse la duplicación de los debates en otros foros internacionales para impedir la pérdida de tiempo, esfuerzos y recursos. En ese sentido, señalamos una vez más que el Protocolo del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima que aprobó la Organización Marítima Internacional en octubre de 2005 se ocupa de cuestiones relativas al transporte ilegal de material radiactivo o de armas de destrucción en masa y otras cuestiones delicadas que podrían repercutir sobre la seguridad marítima.

Por lo tanto, sugerimos que los debates de 2008 sobre la seguridad marítima se centren en el fomento de la capacidad de los países en desarrollo de cumplir con sus obligaciones contractuales de conformidad con los convenios existentes. Ello podría incluir la ayuda para actualizar los sistemas de recolección de información y la creación de bases de datos que permitirían que un Estado pudiera determinar la naturaleza de la carga de los buques con pabellón de su país. También podría incluir la asistencia a los Estados ribereños para que adopten las medidas necesarias para velar por la seguridad de sus puertos mediante la

mejora de los medios de que disponen para inspeccionar la carga cuyo origen, destino o lugar de tránsito sean esos puertos. Asimismo, debería estudiarse la adopción de medidas eficaces contra la piratería y los ataques armados contra buques en alta mar, pero ello no debería dar lugar a la imposición de nuevas obligaciones que podrían ser excesivas para los Estados en desarrollo ni de obligaciones que vayan más allá de las que tienen que cumplir en virtud del derecho internacional y de las normas existentes.

Sra. Picco (Mónaco) (*habla en francés*): Al igual que en sesiones anteriores, el Principado de Mónaco es uno de los patrocinadores de dos proyectos de resolución que se han presentado a la Asamblea General (A/61/L.30 y A/61/L.38). Estos textos han reflejado con el transcurso de los años la atención cada vez mayor que prestan los Estados Miembros a la cuestión de los océanos y el mar. El reconocimiento de la importancia biológica de los océanos, que ocupan más del 70% de la superficie de la Tierra y que representan el 97% de sus recursos hídricos, y el reconocimiento de la fragilidad de los ecosistemas marinos son fundamentales y deben guiar todas las acciones orientadas a la investigación y la conservación del medio marino.

Su Alteza Serenísima el Príncipe Alberto II ha creado una fundación para el medio ambiente y el desarrollo sostenible que se ocupa, entre otras cosas, de la biodiversidad. Un comité científico y técnico compuesto de expertos selecciona los proyectos presentados en relación con la innovación tecnológica, el desarrollo de las actividades, la biotecnología, las investigaciones y los estudios. Por lo tanto, acogemos con especial satisfacción la reagrupación de las disposiciones relativas a la biodiversidad marina en un capítulo concreto y extenso del proyecto de resolución A/61/L.30.

En la reunión del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de la jurisdicción nacional, que se celebró en febrero de 2006, se puso especialmente de relieve la necesidad de intensificar la cooperación y la coordinación así como la importancia de la información científica.

Con motivo de la reunión que celebrará el Grupo de Trabajo en 2008 y a partir del informe del Secretario

General que se preparará para el próximo período de sesiones, podremos volver a evaluar el interés por un instrumento jurídico que se encontrará bajo la égida de Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y se ocupará específicamente de la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional.

Deseo recordar que el Principado continúa su labor en favor de la diversidad biológica marina mediterránea participando activamente en la gestión del acuerdo entre Francia, Italia y Mónaco sobre la creación del santuario Pelagos para mamíferos marinos, y preside su Comité Científico y Técnico. Esta amplia zona protegida es la única zona transnacional que actualmente abarca una zona de alta mar.

El Principado participa también desde hace varios años en las actividades de la Secretaría del Corredor Biológico Marino del Pacífico Este Tropical, que agrupa a Costa Rica, Panamá, Colombia y el Ecuador, y en la labor de su Comité Técnico, en los que aporta su pericia en la gestión de zonas marinas protegidas y biodiversidad marina. Esta cooperación ha permitido, en particular, la celebración de la reunión del Comité Científico en Panamá en agosto de 2006, que estudió el ecoturismo y la creación de una red de expertos turísticos de los cuatro países que participan en el Corredor.

El Comité Científico del Acuerdo sobre la conservación de los cetáceos del Mar Negro, el mar Mediterráneo y la zona atlántica contigua se reunió hace un mes en Mónaco y decidió presentar ante la tercera reunión de las partes, que se celebrará en 2007 en Croacia, las siguientes propuestas: medidas para reducir la contaminación sonora, conservación de las especies amenazadas en el Mar Negro y el delfín común en el Mediterráneo, medidas para reducir las colisiones entre las embarcaciones y los cetáceos, y el fortalecimiento de una red de vigilancia para supervisar varamientos en la zona del Acuerdo. Además, los Estados miembros del Acuerdo decidieron establecer una base de datos conjunta sobre supervisión de cetáceos con la Comisión Internacional para la Exploración Científica del Mar Mediterráneo y con Pelagos, cuyo objetivo es crear sinergia entre las tres organizaciones.

Como saben los miembros, este año se celebró el Primer Día Mundial de la Hidrografía. La cooperación

de la Organización Hidrográfica Internacional con los Estados miembros y las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas sigue desarrollándose, lo que nos complace. La Asamblea General desea que se intensifique la acción para consolidar la capacidad de los países en desarrollo. La cartografía marina es crucial para la industria marítima respecto de la seguridad en el mar, pero también proporciona datos e información útil para explotar de manera sostenible la pesca y proteger el medio marino.

En 2007 la Organización Hidrográfica Internacional tiene previsto elegir como tema del Día Internacional de la Hidrografía “Cartografía electrónica, un elemento esencial para la seguridad y la explotación racional del mar”. Invitamos a todos los Estados a sumarse a esta institución para que ese Día sea un éxito.

Desde hace más de 20 años el Instituto de Derecho Económico del Mar (INDEMER) se esfuerza por difundir sus actividades en esta rama del derecho. El año próximo organizará en París un coloquio sobre el tema del pabellón y otro en Mónaco sobre el patrimonio marítimo mediterráneo, en que se debatirán las cuestiones del ordenamiento del litoral, el restablecimiento de las zonas arqueológicas costeras y la creación de parques naturales con una perspectiva de desarrollo sostenible. El INDEMER acogerá una reunión de expertos gubernamentales para continuar con la aplicación de directrices sobre los efectos para el medio ambiente de la navegación recreativa en el Mar Mediterráneo en el marco del Convenio para la protección del medio marino y la región costera del Mar Mediterráneo (Convenio de Barcelona) y sus protocolos adicionales, con el apoyo de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar.

Para concluir, doy las gracias a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, así como a los colegas Holly Koehler, de los Estados Unidos de América, y Carlos Duarte, del Brasil, quienes facilitaron las consultas sobre los proyectos de resolución que vamos a aprobar, y que guiarán nuestros trabajos el año próximo.

Sr. Niño (República Bolivariana de Venezuela): La República Bolivariana de Venezuela desea formular la presente intervención sobre el tema 71 del programa, Los océanos y el derecho del mar, en particular los subtemas a), sobre los océanos y el derecho del mar, y b), sobre la pesca sostenible. Mi delegación atribuye especial importancia al tema de los océanos y el

derecho del mar, puesto que constituye un asunto prioritario para nuestro país debido, entre otras cosas, a nuestra ubicación geográfica, nuestra preocupación por la preservación ambiental de los ecosistemas marinos y nuestro estricto apego al derecho internacional.

La Asamblea General, mediante la aprobación de la resolución 60/30, en seguimiento a la resolución 59/24, decidió convocar el Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, en febrero de 2006 en Nueva York, como una muestra de la preocupación de la comunidad internacional por los extensos ecosistemas marinos y su deterioro cada vez más notable.

Al reconocer la trascendencia y el alcance de este tema, Venezuela participó activamente en esta reunión del Grupo de Trabajo y señaló en aquella oportunidad que el Convenio sobre la Diversidad Biológica viene considerando este tema, en particular desde la aprobación por la Conferencia de las Partes del Mandato de Yakarta sobre la diversidad biológica marina y costera mediante su decisión II/10, de 1995. Posteriormente, en 2004, aprobó el programa de trabajo ampliado sobre la diversidad biológica marina y costera mediante el anexo I de su decisión VII/5, con una vigencia extendida de 10 años. Asimismo, con ocasión de la octava reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Curitiba (Brasil) en marzo de 2006, la propia Conferencia reconoció, en su decisión VIII/24, el papel clave del Convenio en este sentido. Es por ello que mi delegación está convencida del papel determinante del Convenio sobre la Diversidad Biológica como el marco jurídico que debe regir los trabajos que se adelantarán, así como el instrumento que provea los insumos necesarios a la Asamblea General de esta Organización universal.

Durante las consultas oficiosas sobre el proyecto de resolución sobre este tema (A/61/L.30), insistimos en el reconocimiento del Convenio. Nos complace que el proyecto de resolución que será aprobado por este plenario en su oportunidad contenga de manera explícita un capítulo sobre este tema y que, además, recoja ampliamente las preocupaciones de aquellos Estados que no son partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En este sentido, deseamos reiterar, tal como lo señalamos en la reunión del Grupo de Trabajo celebrada en febrero de 2006 en Nueva York y durante las recién finalizadas consultas oficiosas, que las razones que han impedido a Venezuela ser parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar aún persisten en el tiempo.

Más allá de este contexto internacional, en el ámbito nacional, la República Bolivariana de Venezuela ha reflejado el derecho internacional, entre otras cosas, a través de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, la Ley de Pesca y Acuicultura y el decreto con fuerza de ley sobre zonas costeras.

La adición al informe del Secretario General (documento A/61/63/Add.1), en el capítulo correspondiente a la diversidad biológica marina, señala, al hacer referencia al resumen de las tendencias redactado por los Copresidentes del Grupo de Trabajo, que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar representa el instrumento que establece el marco jurídico por el cual debe regirse el tema en cuestión y el cual, a nuestro juicio, no refleja el debate que se llevó a cabo.

Por el contrario, muchas delegaciones destacaron el papel relevante y clave del Convenio en esta ocasión. Además, hay que aclarar que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no contiene un régimen regulador expreso sobre esta materia. Por ello, Venezuela comparte lo destacado en el párrafo 146 del informe del Secretario General, en que se señala, entre otras cosas, que el Convenio sobre la Diversidad Biológica tiene un papel fundamental que desempeñar en el marco de los trabajos que la Organización llevará a cabo en este sentido, por la extensa experiencia de este Convenio sobre la materia como el instrumento marco para regular la conservación y utilización de la diversidad biológica en todos sus aspectos.

En cuanto al tema de la pesca sostenible, Venezuela desea resaltar que este tema constituye un área prioritaria para nuestro país. Hemos emprendido iniciativas destinadas a promover y ejecutar programas orientados al logro de la conservación, la protección y la ordenación de los recursos hidrobiológicos en el marco de la normativa desarrollada a nivel nacional, específicamente a través de la Ley de pesca y acuicultura.

Otro aspecto importante de la legislación venezolana que conviene destacar es la regulación de la pesca de arrastre, para la cual se ha establecido un régimen de sanciones en caso de incumplimiento de las medidas de conservación y ordenación del recurso.

Deseamos aprovechar, por último, esta oportunidad para expresar nuestro profundo agradecimiento al Ministro Carlos Duarte, del Brasil, por su excelente trabajo como coordinador de las consultas oficiosas. Asimismo, deseamos agradecer a todas las delegaciones que participaron en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de estas consultas el entendimiento de cada uno de los planteamientos formulados por mi delegación y, en particular, a nuestros hermanos y hermanas del Grupo de los 77 y China, así como a Finlandia, en su papel de vocero de la Unión Europea. Esta es una prueba más de que es a través de la negociación, la suma de voluntades y la comprensión de las distintas posiciones que se logra el consenso. El capítulo X del proyecto de resolución sobre los océanos y el derecho del mar es una prueba palpable de la validez y vigencia de las Naciones Unidas como foro universal de negociación multilateral por excelencia.

Sra. Ebrahim (Kuwait) (*habla en árabe*): En primer lugar, deseo dar las gracias al Secretario General por su importante informe titulado, “Los océanos y el derecho del mar” (A/61/63 y Add. 1). En el informe se incluye una amplia descripción de los acontecimientos relativos a los océanos y el derecho del mar, así como importante información sobre los acontecimientos relativos a la aplicación de la Convención y a la labor de la Organización y sus organismos especializados en el ámbito de los océanos y el derecho del mar, a nivel regional e internacional. El informe representa una sólida base para que la Asamblea General examine los acontecimientos en ese ámbito.

El Estado de Kuwait acoge con satisfacción el aumento del número de Estados que se han adherido a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que actualmente son 149. Instamos a los Estados que aún no lo han hecho a que se adhieran a la Convención a fin de promover su universalidad y fortalecer la paz, la seguridad y la cooperación entre todos los Estados sobre la base de la igualdad de derechos y la justicia, de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Encomiamos los progresos realizados en el contexto de todas las actividades acordadas en la Convención, en particular los que se refieren a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Deseamos reafirmar la importancia de la plena aplicación de las disposiciones de la Convención como marco jurídico acordado para el uso de los océanos y los mares con fines pacíficos.

Creemos que la creación de la capacidad marina y la transferencia de tecnología son elementos esenciales para los países en desarrollo que les permitirán desempeñar un papel más eficaz en la ordenación y preservación de los recursos marinos y beneficiarse del desarrollo sostenible de los océanos y los mares. Deseamos encomiar los esfuerzos de la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, que ha ofrecido cursos de capacitación para personal técnico y de gestión de los Estados ribereños en desarrollo.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar renueva el marco jurídico dentro del cual deben realizarse todas las actividades en los océanos y los mares. Establece los límites de las aguas territoriales, así como las jurisdicciones nacionales y los límites de la plataforma continental. Garantiza también la libertad de navegación más allá de las aguas territoriales, así como el derecho de tránsito a través de las aguas territoriales y los estrechos internacionales. Además, promueve las relaciones de amistad y la cooperación entre todos los Estados.

El carácter integrado de la Convención constituye una base para el imperio de la ley en los océanos y los mares. Por lo tanto, el Estado de Kuwait reitera la necesidad de intensificar la cooperación y la coordinación a todo nivel, de conformidad con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, a fin de abordar todos los aspectos de la cuestión de los océanos y los mares de forma integrada. Propugnamos también la gestión integrada y el desarrollo sostenible de los océanos y los mares.

La protección de los ecosistemas marinos y la preservación de los recursos naturales son cuestiones fundamentales. Por lo tanto, hay que adoptar un enfoque más integrado, y seguir examinando y fortaleciendo medidas encaminadas a intensificar la cooperación y la coordinación en el ámbito de la

preservación de la diversidad biológica marina, que podría verse afectada por el cambio climático o por fenómenos naturales o causados por el hombre.

Dentro del marco de esos esfuerzos, también hay que tener en cuenta las recomendaciones del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Plan de Aplicación de las Decisiones de Johannesburgo), que promueven la preservación de la productividad y la diversidad biológica de las regiones marinas y ribereñas vulnerables dentro de las jurisdicciones nacionales y más allá de ellas. Además, hay que poner fin a todas las prácticas perjudiciales de los buques que utilizan equipos de pesca destructivos, que afectan negativamente a los ecosistemas marinos. Nos sumamos también al llamamiento de otras delegaciones en favor de la adopción de medidas internacionalmente vinculantes encaminadas a impedir las actividades pesqueras ilícitas.

El Estado de Kuwait considera que las cuestiones relativas a los océanos y el derecho del mar son muy importantes. Por ello, en 1986, Kuwait se adhirió a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y a otros acuerdos, incluido el Acuerdo relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 2002. Kuwait también es parte en el Protocolo relativo a la contaminación del mar resultante de la exploración y la explotación de la plataforma continental.

Kuwait espera con interés adherirse al Acuerdo relativo a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios.

Deseo señalar que Kuwait es el país anfitrión de la Organización Regional para la Protección del Medio Ambiente Marino, creada en 1978 mediante el Convenio regional sobre cooperación para la protección del medio marino contra la contaminación, cuyo objetivo es conservar los recursos y los ecosistemas marinos y protegerlos de la contaminación. El Acuerdo tiene como objetivo coordinar los esfuerzos de los Estados Árabes del Golfo para la conservación de los recursos marinos y la diversidad biológica marina. Kuwait, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica, también ejecuta programas para la protección de la diversidad biológica marina.

Para concluir, la delegación de mi país quiere reiterar su disposición a empeñarse en esfuerzos

conjuntos para mejorar la vida de todos los pueblos mediante la mejor utilización posible de los recursos marinos y su preservación, de manera que todos los países puedan obtener los beneficios de la diversidad biológica sostenible.

Sr. Sen (India) (*habla en inglés*): Para comenzar, mi delegación quiere agradecer al Secretario General por sus detallados informes sobre los océanos y el derecho del mar.

El informe de este año (A/61/63 y Add.1) contiene información acerca de acontecimientos y cuestiones relacionados con los enfoques por ecosistemas y los océanos, que sirvió de base para los debates en la séptima reunión del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar. En el texto aprobado en el transcurso de la séptima reunión se reconoció que, por su propia naturaleza, el enfoque por ecosistemas no se presta a las medidas "únicas" obligatorias. Incluye secciones sobre los principios rectores para la aplicación del enfoque por ecosistemas, sus posibles elementos constitutivos y la aplicación del enfoque, incluidas sus mejoras. En ese contexto también es necesario prestar la debida atención al fomento de la capacidad, a la transferencia de tecnología y a una mayor consideración de la experiencia de los países en desarrollo a la hora de aplicar enfoques por ecosistemas en la ordenación del medio marino.

El tema de los enfoques por ecosistemas y los océanos nos sitúa ante una variedad de cuestiones que requieren un examen multidisciplinario. El enfoque por ecosistemas se basa en criterios científicos, y es de todos conocido que la comprensión científica de los ecosistemas marinos es aún muy limitada. Más aún, la composición y el funcionamiento de los distintos ecosistemas y de las presiones que soportan varían según la zona, lo que hace que la tarea sea más costosa y compleja. Como se señala en el informe del Secretario General, es posible que donde los ecosistemas cruzan los límites geográficos sea necesario que los Estados fomenten la cooperación bilateral o regional.

Además, se ha demostrado que un enfoque de ese tipo no puede ser rígido. Habida cuenta de los posibles cambios espaciales y temporales deben incorporarse los requisitos de flexibilidad y adaptabilidad. En ese contexto es esencial el desarrollo de enfoques que reconcilien objetivos múltiples, aseguren la

participación de las distintas partes interesadas y acomoden intereses diversos. Por lo tanto, la aplicación continua del criterio de precaución sigue siendo fundamental.

Existen ahora pruebas innegables de que cierta investigación científica de naturaleza intrusiva podría poner en peligro el frágil ecosistema y las especies del fondo marino. Un ejemplo de ello podría ser la investigación marina científica dirigida a la exploración de la diversidad biológica de recursos genéticos y bioquímicos de importancia comercial, la llamada bioprospección. Creemos que los principios generales de la investigación científica marina, a saber, los incluidos en la sección 1 del artículo 140 y en el artículo 241 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar también deberían aplicarse a la bioprospección. La simbiosis entre la diversidad biológica del fondo marino y su ecosistema implica que todos los recursos del fondo marino, vivos y no vivos, son patrimonio común de la humanidad. La tarea que se nos presenta es identificar los riesgos que enfrenta ese patrimonio común de la humanidad y lograr un acuerdo sobre una base jurídica sustantiva para la conservación y ordenación de la diversidad biológica y el uso de los recursos biológicos y biogenéticos del fondo marino y el subsuelo.

No tenemos inconveniente en buscar nuevos enfoques dentro de los límites de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar a fin de fomentar la cooperación internacional dirigida a la conservación y el uso sostenible de los recursos vivos de alta mar, así como de compartir los beneficios derivados de los recursos del fondo marino que se encuentran en zonas más allá de la jurisdicción nacional. No obstante, la participación de los países en desarrollo en la elaboración de estos nuevos enfoques depende, en gran medida, de la información científica de que disponen. Por lo tanto, es fundamental promover la corriente de datos e información científicos, así como la transferencia de los conocimientos derivados de la investigación científica marina, sobre todo hacia los Estados en desarrollo. Nos complace que este año en la octava reunión del proceso consultivo se trate el tema de los recursos genéticos marinos.

Acogemos con beneplácito el lanzamiento de la primera etapa de la Evaluación Mundial del Estado del Medio Marino y la celebración de la primera reunión del Comité directivo especial presidido por México y

Australia. Consideramos que la Evaluación Mundial del Estado del Medio Marino es un instrumento importante para una mejor coordinación y cooperación entre los distintos órganos de las Naciones Unidas y organizaciones conexas y para lograr la integración de la información y los datos científicos y técnicos existentes y para identificar las lagunas al respecto.

En lo relativo a la navegación marítima, quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación ante los incidentes de piratería y robo en el mar. Al respecto, acogemos con beneplácito los esfuerzos regionales en pro del establecimiento de mecanismos de cooperación en materia de seguridad en la navegación y protección medioambiental y, en particular, la entrada en vigor, el 4 de septiembre de 2006, del Acuerdo Regional de Cooperación para reprimir la piratería y el robo a mano armada contra la seguridad de la navegación marítima en Asia y el lanzamiento de su centro de intercambio de información.

Asimismo, quisiéramos subrayar la importancia del principio de libertad de navegación, incluidos los derechos de paso inocente y paso en tránsito a través de los estrechos que se utilizan para la navegación internacional. Puede que los Estados ribereños de los estrechos aprueben leyes o normas sobre el paso en tránsito a través de los estrechos, pero deben hacer cumplir dichas leyes de forma que no sean discriminatorias y que cumplan lo estipulado en el artículo 42 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Las instituciones subsidiarias creadas en virtud de la Convención han informado de significativos avances en sus competencias respectivas. En la actualidad, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental está examinando cinco presentaciones sobre el establecimiento de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas. No obstante, habida cuenta del volumen de trabajo previsto para la Comisión, es fundamental que se aborden las cuestiones relativas a la participación de los miembros en las reuniones, así como su financiación, a fin de que se tengan en cuenta las preocupaciones de los países en desarrollo. Al respecto, también apoyamos el fortalecimiento de la División que realiza las funciones de secretaría de la Comisión ya que, dado el aumento en las presentaciones, la Comisión necesitará más apoyo técnico.

En la actualidad, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos está trabajando en el desarrollo de un régimen jurídico para la prospección y exploración de los sulfuros polimetálicos y las cortezas de ferromanganeso ricas en cobalto a fin de asegurar la eficaz protección del medio marino, la protección y conservación de los recursos naturales de la Zona y la prevención de los efectos perjudiciales que sobre su flora y fauna puedan tener las actividades que se realicen en la Zona.

La Conferencia de revisión del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, celebrada en Nueva York este año, ofreció un foro útil para evaluar la eficacia del Acuerdo. En la Conferencia se hizo notar con preocupación que las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios estaban sobreexplotadas o agotadas. Se considera que la sobrepesca y el exceso de capacidad socavan los esfuerzos para lograr una sostenibilidad a largo plazo para esas poblaciones. Por lo tanto, en la Conferencia se recomendó la reducción urgente de la capacidad pesquera mundial hasta llegar a niveles acordes con la sostenibilidad de las poblaciones de peces. En ese contexto, en virtud del artículo 25 del Acuerdo se reconoció el derecho legítimo de los países en desarrollo a desarrollar una capacidad pesquera en lo relativo a las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios.

Tomamos nota con preocupación del efecto de las prácticas pesqueras destructivas sobre los ecosistemas marinos vulnerables. Hay suficientes datos para sugerir que los hábitats marinos están siendo afectados por la pesca de arrastre, que puede llegar a alterar el funcionamiento, estado y diversidad biológica de los ecosistemas marinos, en particular de los ecosistemas vulnerables. Esa cuestión también se reconoció en 2004, y se tomó nota de la necesidad de mejorar la ordenación de la pesca en aguas profundas y los ecosistemas marinos.

El Secretario General, en su informe sobre los efectos de la pesca para los ecosistemas marinos vulnerables (A/61/154), también hizo hincapié en la necesidad crítica de desarrollar la cartografía del fondo marino y de seguir un criterio de precaución. Así, consideramos que las medidas sujetas a plazos,

propuestas en el proyecto de resolución de este año para proteger los ecosistemas marinos vulnerables, incluidos los montes marinos, los respiraderos hidrotérmicos y los arrecifes de coral de aguas frías, frente a las prácticas destructivas de pesca en los fondos marinos son un primer paso importante para abordar ese problema.

Sr. Liu Zhenmin (China) (*habla en chino*): La delegación china expresa su profundo agradecimiento al Secretario General por su informe sobre los océanos y el derecho del mar (A/61/63 y Add.1). El año pasado se vieron más avances en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y los acuerdos conexos. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por su labor.

La delegación china desempeñó un papel activo en las consultas oficiosas sobre los proyectos de resolución sobre los océanos y el derecho del mar (A/61/L.30) y la pesca sostenible (A/61/L.38), bajo ese tema del programa. Quiero expresar ahora mi agradecimiento al Sr. Carlos Duarte, del Brasil, y a la Sr. Holly Koehler, de los Estados Unidos, por sus esfuerzos por lograr la conclusión fructífera de las consultas sobre los dos proyectos de resolución.

Tomamos nota de que ambos proyectos de resolución conceden gran importancia a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En la actualidad el número de Estados partes en la Convención ha alcanzado los 152. El aumento en el número de Estados partes es un reflejo de la universalidad y autoridad de la Convención, de su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes para enfrentar nuevos desafíos y de su dinámica vitalidad. Tenemos que mantener el carácter unitario y la integridad de la Convención, así como el equilibrio de los distintos intereses, según se establece en ella.

A medida que se desarrollan la ciencia y la tecnología y la explotación de los océanos por la humanidad avanza, aumenta la capacidad de las naciones para utilizar y proteger los océanos al tiempo que aparecen nuevos retos y dificultades. El desarrollo de la ciencia y los recursos marinos es importante para garantizar la seguridad alimentaria, reducir la pobreza, promover el crecimiento económico y preservar la

estabilidad social en todos los países, sobre todo en los países en desarrollo.

Apoyamos los elementos pertinentes sobre desarrollo incluidos en el proyecto de resolución sobre los océanos y el derecho del mar. Según indicaron el Grupo de los 77 y China en las consultas oficiosas, la promoción del desarrollo no es solamente una cuestión de fomento de la capacidad en los países en desarrollo sino también uno de los objetivos fundamentales del régimen del derecho del mar y el orden marítimo. Según se subraya en el preámbulo de la Convención, tanto la cuestión del desarrollo como la de los intereses y las necesidades especiales de los países en desarrollo deberían considerarse desde una perspectiva amplia. Nos complace observar que en el proyecto de resolución se reafirma y destaca el objetivo de promover el uso equitativo y eficaz de los recursos marinos.

La labor de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental es pertinente no sólo para la delimitación de los Estados ribereños de los límites exteriores de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, sino también para la delimitación del fondo marino internacional. Por lo tanto, reviste una gran importancia para la explotación de los recursos en una zona que es patrimonio común de la humanidad.

Tomamos nota de que en el proyecto de resolución se destaca la importancia que tiene la labor de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para la comunidad internacional en su conjunto y se evalúan de forma positiva la labor y la contribución de la Comisión. Al mismo tiempo, en el proyecto de resolución se observan el elevado volumen de trabajo y la situación financiera de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y se expresa la determinación de asegurar la continuación del alto nivel de profesionalismo y el funcionamiento eficaz de la Comisión.

La delegación china siempre ha apoyado la labor de la Comisión y ha proporcionado el apoyo necesario al Sr. Lu Wenzheng, miembro chino de la Comisión, en el desempeño de sus funciones. Confiamos en que el Sr. Lu, con sus brillantes cualidades profesionales y vasta experiencia, seguirá contribuyendo a las labores de la Comisión. Asimismo, esperamos sinceramente que las labores de Comisión se lleven a cabo sin contratiempos y arrojen resultados positivos.

La conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina más allá de las zonas de jurisdicción nacional están relacionados con los ecosistemas marinos, el desarrollo de la salud y la medicina, el avance de la ciencia y la tecnología y el logro de la prosperidad económica para la humanidad. Habida cuenta de lo complejo y sensible de esta cuestión y del limitado conocimiento de que dispone la humanidad deberíamos alentar a la comunidad internacional a que intensifique el estudio y la investigación al respecto. Estamos a favor de la convocación por el Secretario General del segundo período de sesiones del grupo de trabajo oficioso especial en 2008 con el objetivo de estudiar los efectos antropogénicos sobre la diversidad biológica marina y explorar formas de cooperación y coordinación entre los Estados y las organizaciones intergubernamentales.

Consideramos que las medidas para la conservación de la diversidad biológica marina más allá de las zonas de jurisdicción nacional deben acordarse en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y otras convenciones internacionales correspondientes, y que deberían tomar en cuenta las regulaciones existentes que rigen el uso del alta mar y de los fondos marinos internacionales. El propósito de todo ello debería ser el equilibrio entre la conservación y el uso sostenible, y no simplemente prohibir o limitar el uso de los mares y los océanos.

La delegación china tiene un gran interés en la cuestión de la pesca. Como principal agente responsable en la pesca y habida cuenta de nuestro objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible de la pesca en todo el mundo, China siempre ha trabajado con el fin de mejorar la conservación y ordenación de los recursos pesqueros. China desempeñó un papel activo este año en la conferencia de examen del cumplimiento del Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Asimismo, mi país participa de forma activa y constructiva en los debates sobre la cuestión de la pesca en varios mecanismos internacionales y regionales.

La utilización de los recursos pesqueros en alta mar no es, en absoluto, el interés creado de un pequeño número de países. Al considerar y formular medidas para la ordenación y conservación de la pesca, la comunidad internacional debe garantizar que los pueblos, en especial en los países en desarrollo, gocen de sus derechos legítimos sobre los recursos pesqueros.

Acogemos con beneplácito el énfasis expresado en el párrafo correspondiente del proyecto de resolución sobre la justicia y la transparencia en lo referente al proceso interno de toma de decisiones de las organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Uno de los objetivos principales de la Convención es facilitar la navegación marítima. Los sistemas establecidos por la Convención para regular el paso en tránsito a través de los estrechos utilizados para la navegación internacional y el paso por las vías marítimas de los archipiélagos son fundamentales para asegurar la libertad de navegación en el mar, y todos los Estados deberían observarlos. Esperamos que se mantengan esos sistemas de la Convención. Las normas y las leyes promulgadas por un Estado ribereño deben ajustarse a la Convención y al derecho internacional correspondiente, y no deberían socavar el principio de libertad de navegación en el mar.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar proporciona el marco jurídico básico para las actividades de la humanidad en los océanos y constituye el orden marítimo actual. Conjuntamente con todos los demás Estados, China está dispuesta a honrar sus compromisos internacionales siguiendo el espíritu de la Convención y a trabajar en aras del desarrollo de la ciencia y los recursos marinos, así como de la paz, la justicia, la armonía y el progreso de la humanidad.

Sr. McNee (Canadá) (*habla en inglés*): El Canadá se complace de ser uno de los patrocinadores de los proyectos de resolución sobre la pesca sostenible (A/61/L.38) y los océanos y el derecho del mar (A/61/L.30). Esos proyectos de resolución son el testimonio de nuestro propósito común y de la necesidad de medidas prioritarias. Son la prueba de que compartimos una voluntad colectiva para tomar decisiones difíciles, pero, si no se aplican, esos esfuerzos no son más que papel mojado.

El Canadá desea expresar su agradecimiento al Sr. Carlos Duarte, del Brasil, y a la Sra. Holly Koehler, de los Estados Unidos, por haber coordinado con éxito las consultas oficiosas sobre los proyectos de resolución que nos ocupan, así como a la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de las Naciones Unidas por el apoyo mostrado en las reuniones clave de este año.

La vulnerabilidad de los océanos y de sus recursos ha despertado la atención sin precedentes de

los ciudadanos, las comunidades, las organizaciones internacionales, los académicos y la sociedad civil. Esa atención continuará, al igual que las expectativas de que se tomen medidas. El año 2006 fue fundamental para cerrar la brecha entre nuestras palabras y nuestras acciones. Debemos aprovechar el impulso que se ha generado. La opinión del Canadá es que ello ayudará mucho al restablecimiento de la fe de la opinión pública en nuestra capacidad de hacer el trabajo que se nos ha encomendado.

Las prioridades del Canadá en la esfera de la pesca y la ordenación de los océanos son claras: queremos que las medidas den ahora resultados reales y tangibles. Una gestión efectiva e integrada de los océanos pasa por la gestión de todas las actividades que afectan al ecosistema; pero la base de un enfoque integrado debe ser una sólida gestión sectorial. La principal prioridad del Canadá es contar con organizaciones regionales de gestión pesquera firmes, eficaces y dignas de crédito, que tomen decisiones difíciles y apliquen principios de ordenación modernos, como el criterio de precaución y el criterio pesquero basado en los ecosistemas, que en todos los casos se basarán en los mejores conocimientos científicos disponibles. También necesitamos elementos disuasorios eficaces para quienes no respeten las normas, ya sea porque pescan en exceso o porque realizan actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas. Al Canadá le complace que esos objetivos sean factores tan destacados del compromiso colectivo que estamos asumiendo hoy aquí.

En septiembre varios miembros de la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste realizaron reformas concretas e importantes que se ajustaban a esos principios, y esperamos que se efectúe un seguimiento decidido de esos compromisos. Otras organizaciones regionales de gestión pesquera están empezando a hacer esfuerzos semejantes y se están formando otras más, por ejemplo, en el Pacífico norte y el Pacífico sur. Las medidas provisionales que se aplicarán hasta que esas organizaciones se hayan formado y operen oficialmente son cruciales para acabar con la idea de que las flotas sin escrúpulos pueden pescar a su antojo en alta mar.

Hay quienes creen que esos enfoques colectivos son demasiado lentos para resolver los problemas urgentes. Ahora son los Estados Miembros quienes deben aplicar esas resoluciones y demostrar que eso no es cierto. El Canadá se siente consternado cuando, de

manera colectiva, no llegamos a adoptar las decisiones difíciles que son necesarias para la ordenación sostenible de nuestros recursos pesqueros. El mundo está pendiente —y a la espera— de nuestros esfuerzos colectivos por mejorar el estado de los océanos. Todos debemos estar a la altura del reto.

El proyecto de resolución relativo a la pesca sostenible nos muestra nuestro futuro programa. Todos los Estados del pabellón tienen que controlar a sus buques y, en particular, hay que poner coto a los pabellones de conveniencia. También estamos de acuerdo en que es necesario adoptar medidas más rigurosas para los Estados portuarios a fin de impedir que llegue a comercializarse el fruto de la pesca ilegal.

El Canadá y varios Estados más acordaron esas medidas en marzo, durante la reunión final del Grupo de Tareas sobre la Pesca de Altura, cuando hicimos público el informe “Closing the Net: Stopping Illegal Fishing on the High Seas”. Recomendamos la adopción de medidas concretas contra las actividades pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas. Esas recomendaciones merecen toda nuestra atención colectiva. Entre otras cosas, el Canadá defiende el seguimiento de normas modelo para el desempeño de las organizaciones regionales de gestión pesquera, que está desarrollando un grupo de expertos. También pedimos a la Asamblea General que aporte ideas y opiniones sobre este trabajo. Esperamos que las consultas puedan iniciarse en marzo de 2007.

Los Estados y las organizaciones regionales de gestión pesquera deben regirse por los mejores instrumentos internacionales a nuestra disposición. Por ello, el Canadá considera muy importante el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces. Los Estados partes en el Acuerdo ya representan el 70% de las importaciones de peces del mundo. No obstante, el Acuerdo no podrá desarrollar todo su potencial hasta que se logre la participación universal y los Estados cumplan cabalmente con sus obligaciones. Por lo tanto, apoyamos los llamamientos urgentes para que todos los Estados suscriban el Acuerdo, y nos complace que 15 hayan anunciado este año su intención de hacerlo. Acogemos con sumo agrado a los Estados partes más recientes, a saber, el Japón, Niue, Trinidad y Tabago, Estonia, Eslovenia y Polonia.

En cuanto a una cuestión urgente y emergente, también hemos acordado que, de conformidad con los principios generales del Acuerdo, todos los Estados y

las organizaciones regionales de gestión pesquera gestionarán ciertas poblaciones de peces —muchas de las cuales se encuentran en fondos marinos vulnerables. Acogemos con agrado la importante labor que ha emprendido la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a tal efecto.

Al Canadá le complace el resultado de la Conferencia de examen del Acuerdo sobre las poblaciones de peces, en la que los participantes entablaron un diálogo franco pero con verdadero ánimo de cooperación, y tanto los Estados partes como los que no lo son pudieron hacer gala de la flexibilidad necesaria para formular recomendaciones consensuadas. Ahora todos debemos respetar y apoyar esas recomendaciones, así como tomarlas como punto de partida. Será importante que vuelva a celebrarse la Conferencia de examen a su debido tiempo para efectuar el seguimiento de los progresos y para asegurarnos de que seguimos por buen camino en cuanto a la plena aplicación del Acuerdo.

El proyecto de resolución de este año relativo a la pesca sostenible (A/61/L.38) supone un verdadero cambio en el régimen colectivo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables. La pesca responsable debe tener en cuenta las zonas y los ecosistemas que precisan especial protección. El proyecto de resolución ya contiene una norma específica y acordada para autorizar la pesca en esas zonas —una norma práctica, factible y transparente. Ahora todos debemos aplicarla con convicción. El Canadá, al igual que otros, espera que la FAO desempeñe su función de seguir ayudando a los Estados a cumplir con esta obligación.

El objetivo fundamental del Canadá es la pesca responsable. Este proyecto de resolución deja en claro que las actividades pesqueras que no son responsables no deberían autorizarse. Pero si la pesca es responsable —si realmente respeta las normas que han acordado hoy los Estados— el Canadá opina que debe considerarse legítima. Las nuevas disposiciones relativas a la transparencia son importantes para que este resultado sea tangible y mensurable.

El Canadá va a desempeñar el papel que le corresponde. Actualmente estamos desarrollando una nueva política relativa a las zonas marinas delicadas para nuestras aguas. El Canadá también abogó recientemente por una decisión nacional —que

hicieron suya todos los miembros— relativa al cierre de cuatro montes marinos a la pesca comercial, como primera medida encaminada a la protección de los ecosistemas marinos vulnerables.

(continúa en francés)

Los sectores tradicionales como la pesca son muy importantes para los usuarios de los océanos, pero también tenemos que prestar toda nuestra atención a los nuevos problemas y a los nuevos usos de los océanos. Ello se aplica en particular cuando no puede acordarse un sistema de ordenación adecuado debido a que no disponemos de información y conocimientos suficientes para comprender la política y las necesidades en materia de reglamentación.

El Canadá apoya los trabajos del Grupo de Trabajo especial oficioso de composición abierta encargado de estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional como fórmula para centrar una vez más un debate que con frecuencia es demasiado disperso. Nos complace que las deliberaciones prosigan en 2008 y que se basen en el informe del Secretario General.

La ciencia es fundamental para acotar y guiar nuestros trabajos en esta esfera. Nos complace que en el proyecto de resolución relativo al derecho del mar se mencione el taller internacional que se celebró en Ottawa en diciembre de 2005. Ese taller permitió definir los criterios para la designación de áreas marinas biológicas y ecológicas importantes. El trabajo demostró ser un paso determinante para llegar a una comprensión común que trascienda las competencias nacionales de las zonas que precisan que la comunidad internacional les preste especial atención. Invitamos a todas las delegaciones a informarse acerca de los resultados de este taller e invitamos a quienes participarán en los trabajos de seguimiento a aplicar todo el rigor necesario.

El Canadá asume con mucha seriedad su participación en el proceso de consultas oficiosas sobre los océanos y el derecho del mar, a tenor de la rica contribución que puede hacer al debate colectivo sobre los problemas oceánicos. Asimismo, le complace presidir el proceso. El período de sesiones de este año sobre los enfoques ecosistémicos y los océanos ha demostrado que somos capaces de ocuparnos de cuestiones complejas y amplias en el marco de debates bien planificados. Asimismo, confirmó que ya

contamos con varios instrumentos que podrían permitirnos lograr progresos importantes en esferas clave, tanto si se trata de la pesca como de la ordenación integrada de los océanos. Al Canadá le complace que en el período de sesiones del año próximo se aborde la cuestión de los recursos genéticos marinos.

Tal como ocurre con el tema de este año, esa cuestión se beneficiará en gran medida de un debate multifacético en el proceso de consultas oficiosas, que permitirá, en otros foros fortalecer la base del debate en curso sobre políticas.

Para concluir, aunque estamos reunidos para aprobar estos proyectos de resolución que favorecerán el uso responsable de los océanos, debemos reconocer que sólo se trata de pasos en un largo camino que exigirá a cada Estado la adopción de decisiones difíciles. Es fundamental que convengamos una norma colectiva de ordenamiento de nuestra pesca y otras actividades oceánicas. Ya hemos demostrado que podemos tomar decisiones mediante un proceso colectivo; ahora debemos demostrar al mundo que también podemos poner en práctica esas decisiones actuando de consuno.

Sr. Menon (Singapur) *(habla en inglés)*: El 10 de octubre de 1982 quedó abierta a la firma la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en Montego Bay (Jamaica). Ese día tuvo lugar una muestra de apoyo sin precedentes, cuando 119 países firmaron la Convención y uno la ratificó. Ese acontecimiento representó la culminación de 14 años de trabajo, y en él participaron más de 150 países, múltiples sistemas jurídicos y políticos y numerosos niveles de desarrollo económico. Habida cuenta de la diversidad de opiniones e intereses, la conclusión de la Convención para regular el espacio oceánico, sus usos y recursos, constituyó un logro significativo. Como pequeño Estado insular que, no obstante, es una importante nación marítima, Singapur participó activamente en las negociaciones. En efecto, un singapurense, Tommy Koh, desempeñó el cargo de Presidente de la Conferencia durante el último año de la misma. Hoy, con 152 Estados partes, esta “constitución de los océanos” es aceptada como universal. Se trata de un logro histórico del derecho y la cooperación internacionales.

Una característica fundamental de la Convención es que constituye un conjunto indivisible. Las diversas

disposiciones y partes de la Convención estaban interconectadas. Fue necesario conciliar intereses opuestos y que las partes hicieran concesiones mutuas. Considerando que la Convención es un conjunto, los Estados partes deben evitar la tentación de hacer hincapié en aquellas cuestiones que son de su agrado y hacer caso omiso de las cuestiones que no son de su agrado. Esto se aplica particularmente a los nuevos conceptos que han surgido tales como la zona económica exclusiva, los Estados archipelágicos, el derecho de paso en tránsito y el derecho de paso por las vías marítimas archipelágicas. Redunda en nuestro interés común mantener la integridad de la Convención.

Una avenencia fundamental recogida en la Convención es el equilibrio entre las aspiraciones de los Estados ribereños de ampliar sus aguas territoriales de 3 a 12 millas náuticas y el derecho de la comunidad internacional a disfrutar la circulación libre e ininterrumpida por algunas de las vías marítimas mundiales más importantes. A los Estados ribereños se les permitió ampliar sus aguas territoriales a 12 millas náuticas. A cambio de ello, aceptaron un régimen especial de paso en tránsito para las naves y aeronaves a través de los 116 estrechos que se utilizan para la navegación internacional. Este régimen especial se conoce como paso en tránsito, en virtud del cual una nave o aeronave tiene el derecho de paso sin obstáculos a través del estrecho, y el Estado ribereño no puede impedir esa circulación aunque la vía marítima se encuentre dentro de sus aguas territoriales. Esta disposición esencial garantiza el uso continuo de los océanos para facilitar el comercio mundial, del cual entre un 85% y un 90% se realiza por mar.

Desde la entrada en vigor de la Convención en noviembre de 1994 sus instituciones han venido funcionando bien. Entre esas instituciones se incluye la Comisión de Límites de la Plataforma Continental y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Encomiamos al Secretario General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, Embajador Satya Nandan, por su capacidad de liderazgo y su destacada labor.

Este año se celebra el décimo aniversario de la creación del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Una de las 13 causas de las que se ocupó el Tribunal se relacionó con Singapur y Malasia. Por lo tanto, hablamos de una experiencia directa cuando decimos que el Tribunal es capaz de abordar una

amplia gama de controversias relacionadas con el mar y ha demostrado que puede impartir justicia de manera imparcial, expedita y económica. El Tribunal continuará desempeñando un importante papel en el arreglo pacífico de las controversias entre los Estados en materia de derecho del mar. Como prueba de nuestro apoyo, Singapur será anfitrión de un seminario regional del Tribunal el próximo año.

En virtud de la parte XII de sus disposiciones, la Convención también ha ayudado a proteger y preservar el medio marino. En este sentido, la Organización Marítima Internacional (OMI) y su Secretario General, Sr. Efthimios E. Mitropoulos, han realizado una excelente labor.

Singapur considera importante proteger y preservar el medio marino de manera coherente con la Convención y mediante otros tratados internacionalmente aceptados. Por ejemplo, somos uno de los pocos países que se han adherido a los seis anexos de la Convención Internacional para prevenir la contaminación por los buques. También nos adherimos a otros acuerdos relacionados con el medio marino tales como el Protocolo de la OMI sobre cooperación, preparación y lucha contra la contaminación por sustancias peligrosas y nocivas, de 2000. Seguimos evaluando la posibilidad de adherirnos a otro acuerdo relativo a este tema.

Singapur considera conveniente la adopción de un enfoque amplio para abordar la contaminación marina. Apoyamos la creación de un sistema de ordenamiento costero integrado que permita a los países tener una visión integral de las cuestiones relacionadas con el medio marino y costero, incluida la contaminación procedente de fuentes terrestres, la causada por los buques y la biodiversidad marina.

Las pequeños Estados insulares tienen una tasa particularmente elevada de territorio costero en comparación con su superficie total. Singapur seguirá ayudando a esos Estados insulares, así como a otros países en desarrollo, a fomentar sus capacidades por medio del Programa de Cooperación de Singapur.

Los países de nuestra región también han trabajado de consuno para aumentar la seguridad marítima. El 4 de septiembre de 2006, entró en vigor el Acuerdo de Cooperación Regional para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques en Asia. El 29 de noviembre fuimos testigos de la inauguración, en Singapur, del Centro de Distribución de Información del Acuerdo. El Acuerdo comenzó

como una iniciativa japonesa y se ha convertido en el primer acuerdo entre gobiernos para promover la cooperación en la lucha contra la piratería y el robo armado en Asia. Además esta es la primera vez que los gobiernos de Asia colaboran entre sí a una escala tan amplia y a un nivel tan elevado a fin de poner coto a la piratería e institucionalizar la cooperación.

Además de intercambiar información por medio del Centro, el acuerdo también apoyará el fomento de la capacidad y otras formas de cooperación entre sus miembros. La seguridad marítima es un tema importante para todos. Nuestros medios de vida, seguridad, comercio y suministro de energía dependen de una navegación protegida y segura a través de las vías marítimas del mundo. Por consiguiente, a Singapur le complace que el tema de la reunión del proceso abierto de consultas oficiosas de las Naciones Unidas sobre los océanos y el derecho del mar en 2008 será la seguridad y la protección marítimas.

De manera conjunta, Singapur, Malasia e Indonesia, los tres Estados ribereños de los Estrechos de Malacca y Singapur, han venido cooperando de manera estrecha en materia de seguridad marítima. Entre los esfuerzos desplegados se incluyen las Patrullas del Estrecho de Malacca, un marco general en que están comprendidas las Patrullas Marítimas del Estrecho de Malacca y las patrullas aéreas Ojos en el Cielo. Estos esfuerzos colectivos e individuales han dado lugar a una reducción de la piratería en los Estrechos y a la consiguiente decisión del Comité de guerra conjunto de la Lloyds de eliminar los Estrechos de su lista de zonas en riesgo de guerra.

No obstante, nuestros organismos encargados de hacer cumplir la ley siguen vigilando la situación. Seguiremos cooperando mutuamente y con los Estados usuarios a fin de garantizar que los Estrechos permanezcan seguros y abiertos a la navegación en todo momento.

En la Reunión de la OMI sobre los Estrechos de Malacca y Singapur, celebrada en septiembre en Kuala Lumpur, se reconoció que, si bien los Estados ribereños siguen teniendo la responsabilidad primordial, la comunidad internacional debe también dar su apoyo a esos esfuerzos dada la importancia de los Estrechos. Por lo tanto, en la reunión de la OMI celebrada en Kuala Lumpur se apoyó firmemente el mecanismo de cooperación sobre seguridad de la navegación y protección del medio ambiente. Este mecanismo fue

propuesto por los Estados ribereños a fin de promover el diálogo y facilitar la cooperación entre los Estados ribereños, los Estados usuarios, la industria naviera y otros interesados.

Esperamos que el mecanismo de cooperación esté en pleno funcionamiento antes de la celebración de la próxima reunión de la OMI sobre los Estrechos, que se celebrará en 2007 en Singapur. El mecanismo es un hito en la aplicación del artículo 43 de la Convención, en el que se estipula que los Estados usuarios y los Estados ribereños de los estrechos deben cooperar en el establecimiento y el mantenimiento de las ayudas para la navegación y la seguridad, así como a la prevención, la reducción y el control de la contaminación causada por buques.

Aunque la situación general es positiva, a Singapur le preocupan varios hechos que pueden socavar la Convención. En primer lugar, en el artículo 309 se indica que no puede haber reservas o excepciones a la Convención. En el artículo 310 se indica que, si bien los Estados pueden hacer declaraciones no pueden excluir o modificar la Convención. La ley es clara, pero ello no ha impedido a varios Estados hacer declaraciones con la intención de modificar el significado de la Convención o de eximirse de la aplicabilidad de ciertas disposiciones de la Convención. Esos esfuerzos son inútiles y deben ser rechazados.

En segundo lugar, en el curso de las negociaciones sobre la zona económica exclusiva se alcanzó una sutil avenencia, mediante la cual, se permitió a los Estados ribereños que establecieran una nueva zona económica exclusiva de 200 millas marinas de extensión sobre la que ejercerían derechos soberanos de explorar y explotar los recursos naturales vivos y no vivos. Sin embargo, otros Estados continuarían ejerciendo el derecho a la libertad de navegación marítima y aérea en la zona económica exclusiva, así como otras actividades relacionadas con esos derechos, incluidas las actividades militares. La zona económica exclusiva, a diferencia de la situación con respecto al mar territorial, no está sujeta a la soberanía del Estado ribereño. Los intentos recientes por parte de algunos Estados ribereños de modificar unilateralmente el estatuto de la zona económica exclusiva no concuerdan con la Convención.

En tercer lugar, existe una tendencia preocupante de algunos Estados ribereños de inclinar la balanza de

la Convención en favor del medio ambiente. Como he manifestado, Singapur apoya los esfuerzos encaminados a proteger el medio marino y las zonas costeras, pero dichas medidas no deben vulnerar el conjunto de medidas cuidadosamente negociadas y consagradas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Por lo tanto, Singapur propuso, en el curso de las consultas sobre el proyecto de resolución, la inclusión de un párrafo en la parte dispositiva sobre los derechos y las responsabilidades de los Estados ribereños de los estrechos utilizados para la navegación internacional. Nuestro texto, basado en el artículo 42 de la Convención, tenía como objetivo reafirmar el equilibrio entre los derechos de los Estados ribereños para aplicar leyes y disposiciones relativas al derecho de paso en tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Nuestra propuesta recibió el respaldo de muchas delegaciones en el curso de las consultas oficiosas, pero varias delegaciones expresaron su preocupación. En un espíritu de flexibilidad, y con el propósito de alcanzar el consenso, trabajamos con las delegaciones interesadas para hallar un texto aceptable para todos. Lamentablemente, nos faltó tiempo para ello, y el párrafo que propusimos no se ha incluido en el proyecto de resolución. Nuestro texto era razonable, fiel a la Convención y un reflejo de la opinión de muchas delegaciones. Sirvió para reiterar los principios establecidos y aceptados desde hace tiempo. ¿Por qué, entonces, una delegación en particular expresó su firme oposición a que se incluyera dicho texto? El motivo es que numerosos países, incluidas algunas de las principales naciones marítimas del mundo, están en desacuerdo con Australia sobre su reciente decisión de imponer un practicaje obligatorio a todos los barcos no militares que navegan por el Estrecho de Torres.

El Estrecho de Torres, que está situado entre Australia y Papua Nueva Guinea, es un estrecho utilizado para la navegación internacional. Las naves y aeronaves que navegan por esos estrechos y los sobrevuelan se acogen al régimen especial sobre paso de tránsito. Un Estado ribereño de esos estrechos puede adoptar un conjunto de leyes y reglamentos limitado relativo al paso de tránsito a través de dichos estrechos, como se dispone de manera concreta en el artículo 42 1) de la Convención. En el artículo 42 2) también se estipula claramente que dichos reglamentos y leyes no pueden tener el efecto práctico de negar, obstaculizar o perjudicar el derecho de paso de

tránsito. Por lo tanto, la medida de Australia no está acorde, con los artículos 42 1) y 42 2) de la Convención.

Australia sostiene que su decisión tiene el respaldo del Comité de Protección del Medio Marino. No obstante, en el acta de la resolución 53 de dicho Comité se estipula claramente que el Comité no aprobó la decisión de Australia de imponer el practicaje obligatorio. Con el fin de despejar cualquier duda, el Comité se reunió de nuevo en octubre de 2006. En dicha reunión, el Comité reafirmó que su decisión anterior era de recomendación. Veintitrés delegaciones reiteraron su posición de que en la resolución no se estipulaba la autoridad jurídica de imponer el practicaje obligatorio en el Estrecho de Torres o en cualquier otro estrecho utilizado para la navegación internacional.

A pesar de las claras decisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI) en las dos reuniones del Comité, Australia persiste en manifestar que las decisiones de la OMI y el Comité le permiten aplicar su sistema de practicaje obligatorio en el Estrecho de Torres. Hacemos un llamamiento a Australia, un país con el que compartimos muchos intereses estratégicos, para que reconsidere la medida que ha adoptado.

Para concluir, nos complace que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar haya aportado claridad jurídica y certidumbre a un aspecto importante del derecho internacional. Nos complace que las Naciones Unidas contribuyan a la adopción de leyes y políticas sobre el derecho del mar. Nos complace, en general, que los Estados partes hayan ejercido sus derechos y acatado sus obligaciones debidamente en virtud de la Convención. Comprendemos y apoyamos el interés internacional por la protección del medio marino. Consideramos que ello puede lograrse sin socavar los principios de la Convención. Debido a dicho interés, hemos puesto de relieve nuestro desacuerdo con Australia sobre el Estrecho de Torres. Esperamos que Australia tenga en cuenta las opiniones de la comunidad internacional. Nos agradaría trabajar con Australia para hallar una solución que armonice las preocupaciones sobre el medio marino con el interés de que se respete la integridad de la Convención.

Sr. Chitty (Sri Lanka) (*habla en inglés*): A Sri Lanka le complace ser uno de los patrocinadores del

proyecto de resolución A/61/L.30, relativo al tema 71 a) del programa, "Los océanos y el derecho del mar", como lo hace cada año con respecto a textos similares.

En el curso de los años, la resolución anual sobre los océanos y el derecho del mar se ha convertido en un instrumento complejo, técnico y, en cierta medida, interpretativo. Muchos párrafos del preámbulo y de la parte dispositiva se han venido manteniendo año tras año, reafirmando así el reconocimiento esencial de la Convención sobre el Derecho del Mar y sus aspectos conexos. El proyecto de resolución abarca también toda una gama de cuestiones y deja constancia de otros acontecimientos, incluidos las conclusiones de conferencias, seminarios y talleres internacionales en ese ámbito.

La Convención es un instrumento fundamental que aporta el marco jurídico para todas actividades marítimas y la reglamentación de la explotación de todos los recursos de los mares y los océanos y su utilización. En todos los Estados recae la responsabilidad de proteger la integridad de la Convención contra cualquier medida que no esté de conformidad con la Convención. La protección de la integridad de la Convención, a su vez, preserva los equilibrios esenciales alcanzados en su marco y destaca la necesidad de la cooperación internacional y de un enfoque de cooperación en su aplicación.

Cuando por primera vez se concibió la Convención, y cuando se iniciaron las negociaciones al respecto, se reconoció que los recursos vivos de alta mar o de zonas situadas fuera de los límites de la jurisdicción nacional deberían estar reglamentados mediante la cooperación internacional, regional o subregional. Ello resultó obvio a partir de las primeras declaraciones de los gobiernos durante el debate general de la sesión plenaria de apertura de la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En la Conferencia sobre las poblaciones de peces celebrada en 1995 se aprobó el Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, así como los instrumentos conexos. El Acuerdo ya ha sido ratificado ampliamente. En la reciente Conferencia de Examen se ha llegado a la conclusión sumamente

positiva de que la Convención sobre el Derecho del Mar aporta el marco jurídico para la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y que se complementa con el Acuerdo sobre las poblaciones de peces. El proyecto de resolución sobre la pesca sostenible concede gran responsabilidad y atención al papel que desempeñan las organizaciones de ordenación pesquera. La capacidad de gestión de muchos países en desarrollo y el acceso a los datos científicos para participar de manera eficaz en dichas organizaciones pueden necesitar atención en muchos casos.

La Convención ha logrado muchas avenencias delicadas, como en el caso de la disposición sobre leyes y reglamentos de los Estados ribereños de los estrechos relativos al paso en tránsito y a los derechos y responsabilidades de los Estados ribereños de los estrechos utilizados para la navegación internacional, así como sobre los derechos y responsabilidades de los buques extranjeros que navegan por esos estrechos. Dichas leyes y reglamentos deben respetarse.

Acogemos con beneplácito la entrada en vigor del Acuerdo de Cooperación Regional para combatir la piratería y el robo a mano armada contra buques en Asia, del que es parte Sri Lanka, así como el centro de información sobre cartografía que ya se ha establecido. El marco que aportó la Convención de 1982 para la protección y preservación del medio marino se ha desarrollado en muchos sectores para aumentar la suma total de bienestar humano. En 1987, en el informe Brundtland (A/42/427, anexo), se puso de relieve el concepto de desarrollo sostenible. En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, se hizo del desarrollo sostenible un aspecto central de su Declaración, y muchos foros posteriores colocaron el desarrollo sostenible en el centro de atención en todas las cuestiones relativas al desarrollo en los países en desarrollo.

El logro de objetivos de desarrollo importantes, en particular aquellos definidos en la Declaración del Milenio, aprobada por Jefes de Estado en 2000, se ha convertido en una exigencia crucial, y se han promovido muchos enfoques para ese fin. En la Cumbre Mundial celebrada en 2005 se hizo un llamamiento en favor del mejoramiento de la cooperación y la coordinación a todos los niveles con el fin de abordar las cuestiones relativas a los océanos

y los mares de manera integrada, y de promover la gestión integrada y el desarrollo sostenible de los océanos y los mares.

El objetivo del desarrollo sostenible de los recursos marinos, si se aplica eficazmente, contribuiría también al desarrollo socioeconómico de las naciones más pobres del mundo que luchan contra el hambre y la pobreza.

Sri Lanka tiene un largo historial de protección medioambiental y una tradición de desarrollo sostenible. El Magistrado C. G. Weeramantry de Sri Lanka, como Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia, se ha referido a ello en una opinión separada en la causa del Danubio: el caso relativo al proyecto Gabčíkovo-Nagymaros (Hungría/Eslovaquia) sobre la construcción de una presa en el Río Danubio.

El Magistrado Weeramantry hizo referencia a la antigua civilización de Sri Lanka basada la irrigación, en la que se utilizaba un sistema de pantanos o lagos gigantescos contruidos por el hombre, llamados tanques, muchos de los cuales aún existen, y que durante más de 2.000 años han satisfecho las necesidades tanto de la humanidad como de la naturaleza. Basado en un principio enunciado en el siglo XII, el sistema tuvo su origen en la filosofía medioambiental que señalaba que ni siquiera un poco de agua de lluvia desembocaría en el mar sin que antes se hubiera aprovechado en servicio de la humanidad. Y tampoco el agua de lluvia que corre abundante montañas abajo debería llegar al mar sin que antes hubiera pagado tributo a la humanidad durante su recorrido. El Magistrado Weeramantry concluyó en su opinión separada que el principio del desarrollo sostenible forma parte del derecho internacional moderno no sólo debido a su necesidad e indudable lógica, sino también a su amplia y generalizada aceptación por la comunidad mundial.

Habida cuenta de que la filosofía del desarrollo sostenible está, por tanto, consagrada en su historia, Sri Lanka busca, en ese contexto, adherirse también a esa filosofía en el ámbito marino. No obstante, en el marco de las exigencias del proceso de desarrollo económico contemporáneo y de los requerimientos en materia medioambiental que emanan de los foros internacionales, el ámbito marino encara un reto abrumador.

Este año Sri Lanka tomó la iniciativa de introducir en el proyecto de resolución la cuestión de

que los Estados aprovechen los beneficios económicos del régimen de recursos dentro de los límites de la jurisdicción nacional establecido por la Convención, como se refleja en los párrafos 86, 87 y 88 de la parte dispositiva. Sri Lanka agradece el apoyo recibido de las delegaciones.

El proceso consultivo utilizado en la elaboración del proyecto de resolución es intenso y arduo. Las consultas y la cooperación son los únicos medios de resolver la situación que causan los diferentes puntos de vista y de lograr disposiciones de consenso. Sri Lanka, al pertenecer al grupo de los países en desarrollo, valora el apoyo colectivo y reconoce la expresión eficaz y elocuente en ese sentido del Presidente del grupo en el curso de las consultas, el Ministro Sivu Maqungo de Sudáfrica. La manera en que el Ministro Plenipotenciario Carlos Duarte del Brasil dirigió las consultas constituyó un ejemplo de paciencia y demostró un dominio de los temas en cuestión.

Los párrafos 86, 87 y 88 del proyecto de resolución ofrecen una oportunidad a los Estados que enfrentan dificultades, a saber, los Estados en desarrollo, en particular los Estados menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los Estados ribereños de África, para identificar sus necesidades con respecto a lograr el desarrollo sostenible de los recursos marinos y su utilización en virtud de sus respectivas jurisdicciones, y para cumplir las obligaciones adicionales que emanan de los diversos foros internacionales. Ese conocimiento de la situación imperante resaltaría la naturaleza y el alcance de la cooperación internacional y podría servir para responder de manera eficaz a las necesidades y dificultades de este grupo de Estados. La cooperación internacional en ese contexto tiene necesariamente que abordar los medios de desarrollo de los recursos sostenibles desde el punto de vista científico, tecnológico, financiero y de la gestión.

Al mismo tiempo, dichos párrafos ofrecen una oportunidad al grupo de Estados que han obtenido éxito y un resultado positivo en el desarrollo de los recursos en alguno o en todos los ámbitos del sector marino para describir y analizar dichas experiencias, centrándose en la necesaria movilización de conocimientos, pericia y capital.

El esperado resultado final es, por tanto, una situación que sólo producirá beneficios, una situación

en que los Estados que pertenecen al segundo grupo pueden aprovechar sus experiencias positivas y elaborar sus programas bilaterales y multilaterales de desarrollo de los recursos, mientras que los Estados del primer grupo pueden extraer lecciones de dichas experiencias, conseguir la pericia técnica, crear alianzas y adherirse a los acuerdos para el desarrollo y recibir infusiones de capital. Las organizaciones internacionales, especialmente los organismos especializados de las Naciones Unidas y las organizaciones para el desarrollo y financieras, también pueden elaborar sus programas de asistencia internacional en el sector marino, garantizando de ese modo la máxima eficacia.

El estudio preparado por el Secretario General, que se pide en el párrafo 88 del proyecto de resolución, puede aportar, por tanto, una perspectiva general de los retos y enfoques respecto de las medidas que pueden abordarlos, y pueden constituir una base de información para el desarrollo sostenible de los recursos marinos y los usos de los océanos.

En cuanto a la labor de las instituciones establecidas en virtud de la Convención, para muchos países en desarrollo no ha sido posible asistir a las sesiones de la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. No obstante, las declaraciones presentadas por el Secretario General en las reuniones de los Estados partes y ante la Asamblea General son sumamente útiles y aportan una oportunidad para ver cómo se desarrolló la labor pionera que ha llevado a cabo. Sus excelentes publicaciones, incluidos los muchos estudios técnicos y los resultados de los seminarios, son sumamente informativos y útiles, al igual que las actas de las reuniones y la documentación oficial.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró recientemente su décimo aniversario, y la presentación ceremonial en esa ocasión fue seguida de un seminario muy bien organizado sobre diversos temas y cuestiones importantes. Si bien lamentamos que el Tribunal no tenga causas en estos momentos, sería deseable que se llevaran a cabo las actividades para divulgar información más ampliamente sobre sus normas, jurisdicción y procedimientos en la presentación de causas, así como para distribuir más ampliamente su documentación, especialmente mediante publicaciones de texto completo en su sitio en la red y de publicaciones en rústica a precio asequible.

Es probable que la aclaración y simplificación de los requisitos para la representación de las partes y de los procedimientos para presentar solicitudes, especialmente en casos de rápida liberación de buques y tripulación, y para la adopción de medidas provisionales, también sean una ayuda para las posibles partes. También se toma nota del hincapié que se hace en el proyecto de resolución de promover la contratación de funcionarios representativos desde el punto de vista geográfico en el cuadro orgánico y categorías superiores para la Secretaría.

El trabajo de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental es sumamente importante, y a mi delegación le complace que se hayan propuesto medidas, a iniciativa de China, para garantizar la continuidad y eficacia en su importante labor, así como para el fortalecimiento de la División que desarrolla funciones de secretaría de la Comisión. Tomamos nota en particular de los párrafos 46 y 47 de la parte dispositiva, relativos a la participación de los Estados ribereños en las reuniones de la Comisión y a la necesidad de una interacción entre la Comisión y los Estados que presentan información.

El órgano de la Secretaría que desempeña las funciones de secretaría de la Convención —es decir, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la Oficina de Asuntos Jurídicos— tiene un papel crucial que desempeñar en apoyo de las instituciones para quienes desempeñan sus tareas y de las conferencias y reuniones a las que presta servicios. A pesar de que la labor de la División es enorme, ha dado una respuesta eficaz bajo la orientación del Director y la gestión del Secretario General Adjunto, el Asesor Jurídico de las Naciones Unidas.

Valoramos los servicios eficaces que se de han prestado en la Reunión de los Estados Partes, el proceso abierto de consultas oficiosas, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, los talleres para la creación de capacidad y en los programas de becas. Los acuerdos alcanzados con relación al Programa de Becas en memoria de Hamilton Shirley Amerasinghe, como propuso el Asesor Jurídico y que se ven reflejados en el párrafo 19 de la parte dispositiva del proyecto de resolución, son encomiables. Ello perpetuará la memoria del Embajador Amerasinghe de Sri Lanka, que dirigió la Conferencia como Presidente desde su iniciación en 1973 hasta su muerte en 1980.

Además de otra documentación presentada por la División, el informe anual del Secretario General a la Asamblea (A/61/63 y Add.1) tiene una excelente presentación y contiene un caudal de información en su limitado su tamaño. Se ajusta, sin duda alguna, a los requerimientos que figuran en el párrafo 2 a) del artículo 319 de la Convención.

Quisiera también referirme al Secretario General Kofi Annan, quien siempre ha apoyado firmemente el imperio de la ley en los océanos y en la labor de la Secretaría, así como la Convención sobre el Derecho del Mar.

Se levanta la sesión a las 13.00 horas.